

Señores

**JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO (REPARTO)**

**Buga – Valle del Cauca**

ASUNTO: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTES: **JONATHAN BARBOSA CASAS Y OTROS**

DEMANDADOS: **LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO.**

**JONATHAN VELÁSQUEZ SEPÚLVEDA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.116.238.813 de Tuluá, y tarjeta profesional No. 199.083 del C. S. de la J., actuando en calidad de representante legal y profesional del derecho inscrito en el certificado de existencia y representación legal de **LEGALGROUP ESPECIALISTAS EN DERECHO S.A.S.** con NIT. 900.998.405-7, persona jurídica apoderada<sup>1</sup> judicial de las personas relacionadas en el acápite de “DEMANDANTES”, según poderes que adjunto, presento acción contenciosa administrativa bajo el medio de control de reparación directa, en contra de **LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**, representadas por el Fiscal General de la Nación, el señor Néstor Humberto Martínez Neira y el Director de la Rama Judicial, el señor José Mauricio Cuestas, o quienes hagan sus veces, para que se declaren responsables administrativa y patrimonialmente de forma solidaria, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor **JONATHAN BARBOSA CASAS**, durante el lapso comprendido **entre el 10 de abril del 2015 y el 15 de octubre de 2015**, así como el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. En consecuencia, se indemnice por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales y en general aquellos que el H. Consejo de Estado ha reconocido, según los hechos y pretensiones que a continuación se consignan.

## **INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PARTES**

### **LEGITIMACIÓN POR ACTIVA: LA VÍCTIMA JONATHAN BARBOSA CASAS Y DIRECTOS AFECTADOS POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS**

<sup>1</sup> **Artículo 75 C.G.P.:** “Designación y sustitución de apoderados. Podrá conferirse poder a uno o varios abogados. Igualmente podrá otorgarse poder a una persona jurídica cuyo objeto social principal sea la prestación de servicios jurídicos. En este evento, podrá actuar en el proceso cualquier profesional del derecho inscrito en su certificado de existencia y representación legal. Lo anterior, sin perjuicio de que la persona jurídica pueda otorgar o sustituir el poder a otros abogados ajenos a la firma. Las Cámaras de Comercio deberán proceder al registro de que trata este inciso.”

DEMANDANTES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CALIDAD FRENTE A LA VÍCTIMA
JONATHAN BARBOSA CASAS	C.C. 1.124.854.865	VÍCTIMA
LILIANA MAGALID SANTAMARÍA BELTRÁN	C.C. 1.116.240.729	COMPAÑERA PERMANENTE
JEISON SMITH BARBOSA SANTAMARÍA	NUIP 1.117.025.829	HIJO MENOR
MICHEL BARBOSA SANTAMARÍA	NUIP 1.116.078.173	HIJA MENOR
ESPERANZA CASAS FLÓREZ	C.C. 31.790.210	MADRE
ANCÍZAR BARBOSA FLÓREZ	C.C. 4.564.528	PADRE
ISRAEL MUÑOZ CASAS	C.C. 14.802.234	HERMANO

DEMANDADAS: LEGITIMACIÓN POR PASIVA:

**LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:** Ya que fue la Fiscalía en cabeza del Fiscal de turno, la que asumió la investigación y quien solicitó la imposición de medida de aseguramiento, así como la correspondiente formulación de cargos al señor JONATHAN BARBOSA CASAS como presunto COAUTOR de los delitos de FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS O EXPLOSIVOS en concurso con TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES, logrando con sus supuestas pruebas que el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Tuluá, Valle, le impusiera la respectiva medida de aseguramiento, iniciando así el calvario para el señor JONATHAN BARBOSA CASAS y su familia.

Frente a la legitimación en la causa, el **CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C. Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE.** Mediante sentencia del quince (15) de octubre de dos mil quince (2015)- **Radicación número: 05001-23-31-000-2003-03407-01(34952) Actor: OCTAVIO MUÑOZ GRISALES Y OTROS Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - Y OTROS,** manifiesta entre otros, que: *“La Nación-Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva, pues es la entidad encargada de la investigación y acusación del señor Octavio Muñoz Grisales en el proceso penal que se le siguió...”*.

**NACIÓN – RAMA JUDICIAL:** Ya que fue el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Tuluá, Valle, el que impartió legalidad a la captura, además fue quién impuso la medida de aseguramiento al señor **JONATHAN BARBOSA CASAS**; iniciando así el calvario para el demandante y sus familiares.

## HECHOS

1. El señor JONATHAN BARBOSA CASAS es compañero permanente de la señora LILIANA MAGALID SANTAMARÍA BELTRÁN, producto de esta unión, procrearon dos hijos que son JEISON SMITH BARBOSA SANTAMARÍA y MICHEL BARBOSA SANTAMARÍA (VER PRUEBA 1 – REGISTROS CIVILES Y VER PRUEBA 1A – DECLARACIÓN EXTRAJUICIO).
2. El señor JONATHAN BARBOSA CASAS es hijo de la señora ESPERANZA CASAS FLÓREZ y del señor ANCÍZAR BARBOSA FLÓREZ (VER PRUEBA 1 - REGISTROS CIVILES).
3. El señor JONATHAN BARBOSA CASAS tiene un (01) hermano que es ISRAEL MUÑOZ CASAS (VER PRUEBA 1 - REGISTROS CIVILES).
4. Para el mes de abril de 2015, el señor JONATHAN BARBOSA CASAS vivía con sus padres y sus dos hijos menores de edad en el municipio de Tuluá, Valle. JONATHAN BARBOSA se caracterizaba por ser una persona responsable, honrada, cumplidora de su deber y pilar fundamental de su familia, toda vez que su padre sufría de diabetes y no trabajaba, y su madre era ama da casa, correspondiéndole al señor BARBOSA CASAS laborar como oficial de construcción, actividad lícita que desempeñaba desde muy temprana edad de forma responsable y con gran rendimiento, lo cual le servía para ayudar en la manutención del hogar, en especial para el sostenimiento de sus hijos. (VER PRUEBA 3 - EXPEDIENTE PENAL – INTERROGATORIO FORMULADO AL SEÑOR JONATHAN BARBOSA CASAS FOLIOS 48 A 51 Y VER PRUEBA 3 – EXPEDIENTE PENAL - CONSTANCIAS LABORALES FOLIOS 80 A 83)
5. El mismo mes de abril de 2015, el señor JONATHAN BARBOSA CASAS

trabajaba como contratista del señor JAIBER MALDONADO, representante legal de la empresa OBRA CIVIL COLOMBIA S.A.S., sociedad con la cual tenía un buen rendimiento y desempeño en las actividades de construcción que ejercía. (VER PRUEBA 3 - EXPEDIENTE PENAL - CONSTANCIA LABORAL FOLIO 80)

6. Es importante mencionar que JONATHAN BARBOSA es consumidor habitual de marihuana desde los 14 años de edad, tema que no le ha impedido ser una persona responsable, colaborar en su hogar económicamente, y salir adelante honradamente. (VER PRUEBA 3 - EXPEDIENTE PENAL – INTERROGATORIO FORMULADO AL SEÑOR JONATHAN BARBOSA CASAS FOLIOS 48 A 51)

7. El señor JONATHAN BARBOSA CASAS, consciente de lo incómodo que es para los demás ciudadanos percibir el humo de las personas consumiendo droga en un sitio público, procura hacerlo en sitios donde no incomode a ningún coasociado. Es necesario aclarar, que consumir sustancia estupefaciente, no se encuentra proscrito en el ordenamiento jurídico colombiano, ni se configura en momento alguno como delito, en tal sentido, la conducta desplegada por el hoy demandante no era constitutiva de reproche penal.

8. El día 10 de abril de 2015, el señor JONATHAN BARBOSA se dirigió en horas de la mañana al hogar de su amigo JHONY ALEXANDER VALENCIA TORRES, ubicado en la manzana M lote 6 del Barrio San Francisco de Tuluá, Valle; cuando el hoy demandante llegó, y su amigo VALENCIA TORRES le abrió por la entrada que da acceso al patio de la casa. La puerta por donde le abrió JHONY ALEXANDER estaba construida con esterilla y guadua y el patio a donde el visitante ingresó, era un lote que se encontraba encerrado con cerca de guadua y en él había varias habitaciones fabricadas en este mismo material. (VER PRUEBA 3 - EXPEDIENTE PENAL – INTERROGATORIO FORMULADO AL SEÑOR JONATHAN BARBOSA CASAS FOLIOS 48 A 51)

9. Así es como el día en mención, JONATHAN BARBOSA se disponía a fumar marihuana con JHONY ALEXANDER en la parte de atrás de las habitaciones que estaban en el patio antes mencionado; una vez ellos empezaron a fumar sus cigarrillos de marihuana, llegó ROBINSON JIMÉNEZ HENAO, persona que al igual que el señor JONATHAN BARBOSA también conocía desde hace

mucho tiempo, pues vivieron en el mismo barrio por un largo periodo. Así mismo, ROBINSON JIMÉNEZ se unió a sus compañeros para consumir marihuana también. (VER PRUEBA 3 - EXPEDIENTE PENAL – INTERROGATORIO FORMULADO AL SEÑOR JONATHAN BARBOSA CASAS FOLIOS 48 A 51)

10. En el momento en que estaban fumando, de forma imprevista agentes de la Policía Nacional adscritos a la SIJIN ingresan al bien inmueble en que se encontraban las personas antes mencionadas, con el fin de realizar una diligencia de registro y allanamiento. JONATHAN, JHONY y ROBINSON al ver la llegada de los policiales, se sienten intimidados e intentan correr, pero son capturados al instante. JONATHAN BARBOSA jamás se imaginó que en dicha vivienda encontrarían una granada de fragmentación y una cantidad considerable de marihuana, sin embargo, fue aprehendido y judicializado conjuntamente con ROBINSON JIMÉNEZ y JHONY ALEXANDER VALENCIA (VER PRUEBA 3 - EXPEDIENTE PENAL – INTERROGATORIO FORMULADO AL SEÑOR JONATHAN BARBOSA CASAS FOLIOS 48 A 51)

11. En el Informe ejecutivo – FPJ 3 y en el Formato Único de Noticia Criminal – FPJ 2 diligenciados por la Policía Judicial, y aportados al proceso penal adelantado contra las personas indiciadas, con motivo de los hechos antes mencionados, quedó consignado en ambos formatos, idéntica narración de los hechos, los cuales nos permitimos extractar de la siguiente manera:

(Apartes transcritos en su literalidad, incluso con errores)

*“EL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2015, LA FISCALÍA 31 SECCIONAL DE TULUA VALLE, AUTORIZA DILIGENCIA DE ALLANAMINETO Y REGISTRO PARA EL INMUEBLE UBICADO: EN LA URBANIZACIÓN SAN FRANCISCO SIN NOMENCLATURA VISIBLE, PERO SE DESCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA ASI: EN SU FRENTE SE ENCUENTRA CUBIERTA POR ARBUSTOS Y CERCO EN MADERA Y GUADUAS SE TOMA COMO REFERENCIA LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL BIEN INMUEBLE (...)  
POR TAL MOTIVO PARA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2015 Y MEDIANTE INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR FUENTE HUMANA, PERSONAL QUE INTEGRA LA UNIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SIJIN TULUA, SE DESPLAZA AL INMUEBLE A ALLANAR Y HACER EFECTIVA DICHA DILIGENCIA DE REGISTRO Y ALLANAMIENTO POR*

LO QUE A ESO DE LAS 08:30 HORAS DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2015, SE LLEGA HASTA EL INMUEBLE DESCRITO (...)  
(...) AL LLEGAR AL INMUEBLE SE OBSERVA QUE LA PUERTA DE INGRESO ESTABA CERRADA POR LO QUE SE TOCA LA MISMA EN VARIAS OPORTUNIDADES, Y HABLANDO EN VOS FUERTE QUE SOMOS FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA NACIONAL Y QUE ACTUÁBAMOS BAJO ORDEN DE ALLANAMIENTO PERO SIN RESPUESTA ALGUNA DE SUS MORADORES (...) SE OPTA POR DERRIBAR LA PUERTA E INGRESAR A LA MISMA POR LO QUE YA AL INTERIOR UNA VEZ QUE LLEGAMOS A LA PARTE TRASERA DEL INMUEBLE MAS EXACTAMENTE AL PATIO DE LA MISMA SE OBSERVA QUE CORREN HACIA ATRÁS TRES PERSONAS DE SEXO MASCULINO AL PARECER CON EL ANIMO DE HUIR DEL INMUEBLE, QUIENES TRATAN DE DERRIBAR UNA CERCA HECHA EN TEJA DE ZINC QUE DIVIDE EL PATIO DE LA CASA CONTIGUA PERO ESTOS SUJETOS SE INTERCEPTAN Y SE PROCEDEN A REGISTRARLOS, Y RESPONDEN A LOS NOMBRES DE: ROBINSON JIMENEZ HENAO (...) Y EL SEÑOR JONATHAN BARBOSA CASAS (...) Y EL SEÑOR JHONY ALEXANDER VALENCIA TORRES (...) DE IGUAL FORMA DURANTE EL RECORRIDO QUE HICIERON LOS TRES SUJETOS SE VERIFICO SI SE HABÍAN ARROJADO ALGÚN ELEMENTO SOSPECHOSO, POR LO QUE AL REVISAR EN EL PATIO Y EN UN ENVASE PLÁSTICO UTILIZADO PARA ARROJAR BASURA Y AL INTERIOR DE ESTE SE ENCONTRÓ UNA GRANADA DE FRAGMENTACIÓN M-26 DE COLOR VERDE LA CUAL ESTABA CON SU RESPECTIVO PIN DE SEGURIDAD POR LO QUE SE FIJA FOTOGRÁFICAMENTE Y CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE REQUIEREN SE INCAUTA RECOLECTA Y EMBALA (...) SEGÚN LABORES PRELIMINARES REALIZADAS PARA LA SOLICITUD DE ALLANAMIENTO EN DICHO INMUEBLE ERA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDAD ILÍCITA POR VARIAS PERSONAS SE CAPTURAN ESTAS PERSONAS (...) SE CONTINUO CON EL REGISTRO DEL INMUEBLE, Y AL VERIFICAR BIEN EN EL PATIO DE ROPAS, SE HALLÓ EN EL PISO UNA BOLSA PLASTICA TRASPARENTE AL INTERIOR DE ESTA 80 ENVOLTURAS DE PAPEL DE COLOR BLANCO CONTENTIVOS CADA UNO DE SUSTANCIA VEGETAL DE COLOR VERDE CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LA MARIHUANA(...).”(VER PRUEBA 3 - EXPEDIENTE PENAL – FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL FOLIOS 18 A 24 Y VER INFORME EJECUTIVO FOLIOS 25 A 28)

Debe resaltar este mandatario judicial que, estos informes fueron la columna vertebral de la “investigación” adelantada por la Fiscalía General de la Nación, la cual solo se limitó al facilismo de intentar probar la culpabilidad del señor JONATHAN BARBOSA CASAS, y tal y como se puede evidenciar, no se dejó constancia en los informes de los motivos por los cuales se llevó a cabo el allanamiento de la vivienda y posterior captura de sus ocupantes, asimismo se constata que el procedimiento se realizó con información de una persona indeterminada, sin que se pudiera desprender, alguna responsabilidad de las personas allí detenidas, en especial del señor JONATHAN BARBOSA CASAS,

quien únicamente se encontraba de forma circunstancial en esa casa, sin cometer algún ilícito, puesto que este solamente era un consumidor de marihuana, a quien no le pertenecían los elementos incautados por la Policía Judicial y mucho menos el inmueble allanado.

12. Después del procedimiento correspondiente, el material estupefaciente que se encontró en el piso del patio, consistía en una bolsa plástica contentiva de 80 envolturas de papel con sustancia vegetal, que fue identificada preliminarmente como marihuana en cantidad de **22 gramos peso neto**. Es de resaltar que, JONATHAN BARBOSA CASAS nunca estuvo en posesión de dicho material estupefaciente y mucho menos del material explosivo hallado, además no existió un mínimo fundamento probatorio que estableciera que el entonces indiciado, fuera sorprendido en posesión, distribución o venta de aquel material ilícito como lo quiso hacer ver la Fiscalía. Asimismo, cabe anotar que la dosis permitida para marihuana es de 20 gramos<sup>2</sup>, por lo que de entrada se desprende que frente a este delito la investigación no tenía ningún norte, pues si se presumiera, aunque no es así, que era propiedad de los 3 sujetos se dividiría el peso entre estos, arrojando una cantidad de marihuana de escasos 7.3 gramos, muy por debajo de la dosis personal autorizada por la Ley. (ESCUCHAR PRUEBA 4 – AUDIENCIA DE PRECLUSIÓN – DESDE EL MINUTO 24:00 HASTA EL 24:19)

13. El día 12 de abril de 2015, en audiencia preliminar realizada ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Tuluá, Valle, se expusieron las supuestas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron capturados los indiciados, el Juez de Control de Garantías impartió legalidad a la captura y a la incautación de la evidencia física obtenida, acto seguido prosiguió la Fiscalía a formular imputación al señor JONATHAN BARBOSA CASAS en calidad de presunto coautor de las conductas punibles de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a lo cual el imputado; **NO ACEPTÓ**  
**LOS CARGOS**, (SIEMPRE TUVO CLARO QUE ERA INOCENTE).

14. En la referida audiencia, ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con

---

<sup>2</sup> COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Literal J Artículo 2 de la Ley 30. (31, enero, 1986). Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1986.

Función de Control de Garantías de Tuluá, Valle, la Fiscalía General de la Nación solicitó la imposición de medida de aseguramiento contra JONATHAN BARBOSA CASAS, a sabiendas de que éste no era un peligro para la sociedad, pues como se manifestó en hechos anteriores, el señor BARBOSA CASAS era una persona productiva, y que colaboraba para conseguir el sustento de su hogar.

**FALLA** el Fiscal de turno al hacer una imputación y solicitar la medida de aseguramiento al señor BARBOSA CASAS, señalándolo de ser un peligro para la sociedad, situación que no era cierta, pues se trataba de una persona adicta a las sustancias estupefacientes, pero que en lugar de convertirse en un amenaza para la sociedad, se preocupaba por laborar y sacar adelante su familia, otros factores que fueron omitidos por la FISCALÍA y LA RAMA JUDICIAL al momento de decidir sobre una privación de la libertad preventiva en contra del ciudadano JONATHAN BARBOSA CASAS.

**YERRA** el Ente investigador a través de sus funcionarios, pues tal y como se puede observar en el formato de arraigo, (visible a folios 32 al 34 de la PRUEBA 3 - EXPEDIENTE PENAL) se determina una actividad mediocre por parte de los investigadores de campo, al limitarse a suscribir éste formato con información suministrada por el mismo capturado y dejando muchos espacios en blanco, con el argumento de que no hay otra persona que la pueda aportar, lo cual resulta indudablemente reprochable, puesto que es un documento indispensable, en el cual si se constataba correctamente la información allí solicitada, se podía colegir que estaban en presencia de una persona a la cual no se le podía atribuir la existencia de indicios graves en su contra. Así las cosas, en tratándose de la libertad de un ser humano, la actividad investigativa debe ser tendiente al esclarecimiento de los hechos, y no encaminada a simplemente darle trámite a un documento más.

15. A continuación, y ante la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de la imposición de medida de aseguramiento, el Juzgador de Control de Garantías, sin contar con los elementos materiales de prueba suficientes para llegar a la verdad real de lo ocurrido y haciendo caso omiso a la presunción de inocencia de la que deben gozar todas las personas, máxime cuando el señor BARBOSA CASAS MANIFESTÓ QUE ERA INOCENTE, **RESTRINGE** la libertad de éste. (VER PRUEBA 2 – EXPEDIENTE INPEC - ORDEN DE ENCARCELACIÓN NO. 079)

Es importante anotar en este punto, el deber que tiene la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, previo a solicitar una imposición de medida de aseguramiento, de darle una correcta valoración al material probatorio aportado por las autoridades de Policía, pues tal y como se puede observar en sentencia del Consejo de Estado de 14 de marzo de 2016<sup>3</sup> se vislumbra una clara posición por parte de esta Alta Corporación cuando se refiere a la actividad investigativa que debe adelantar la FISCALÍA, y al respecto manifestó:

*“Esto demuestra la insuficiencia probatoria del informe y la imposibilidad de considerarlo como un indicio grave en contra del sindicado. En consecuencia, se declarará la falla en el servicio de la Nación- Fiscalía General de la Nación- por haber ordenado la captura del hoy demandante con fundamento en las declaraciones de una persona y un informe de policía incompleto, sin realizar las investigaciones pertinentes para corroborar la información obtenida de aquellos (...)”.*

(RESALTADO FUERA DE TEXTO)

Es imperativo que el Ente investigador haga un análisis previo que le permita actuar sin vulnerar derechos de primer orden como lo es el derecho a la libertad. Recordemos que en Colombia estamos ante un sistema Penal de justicia rogada, y la Fiscalía goza de plena autonomía a la hora de solicitar medida de aseguramiento en contra de un ciudadano, así exista de por medio un informe de Policía, es deber del Ente que investiga, establecer de manera fehaciente que en realidad se está ante un indicio grave, que soporte la restricción del derecho a la libertad de los asociados, tal y como se privó de la libertad injustamente al señor JONATHAN BARBOSA CASAS.

16. Falla la JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS, al omitir su deber Constitucional de velar por los DERECHOS FUNDAMENTALES de los asociados, pues tal como se puede observar en sentencia C-186 de 2008:

*“SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Actuación de la Fiscalía General de la Nación bajo la vigilancia del juez de control de garantías/SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Limitaciones y*

---

<sup>3</sup> Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera-Subsección C-Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Luque Bogotá, D.C. catorce (14) de marzo de dos mil dieciséis (2016) radicación número: 08001-23-31-000-1997-13084-01(38403) actor: Martin Augusto Escorcía Escorcía y otros

**restricciones de derechos fundamentales por la Fiscalía sujetas a control de juez de control de garantías**

*En el diseño constitucional del nuevo proceso penal la Fiscalía General de la Nación no puede actuar a su arbitrio en el ejercicio de sus funciones de investigación y acusación, **ya que cuando su actuación compromete derechos fundamentales, debe someterse a la supervisión del juez de control de garantías, a quien corresponderá verificar si las medidas adoptadas por el ente investigador implican o no afectación de derechos fundamentales, pues en principio toda medida de investigación que sea restrictiva de tales derechos debe estar precedida de autorización de dicho juez.***

La Honorable Corte Constitucional, le otorga a dicho Juez una función de guardián de derechos fundamentales, verificando que el Ente acusador no proceda de forma arbitraria a vulnerar aquellos derechos que el Estado desde la Constitución se compromete a garantizar. Es claro que las actuaciones de los servidores públicos se presumen legales, y como tales, la Juez de Control de Garantías perfectamente podía endilgarles credibilidad; pero ante una situación de duda fehaciente, tal y como se presentó en el caso del señor BARBOSA, no se justifica haberle limitado el derecho fundamental a la libertad a este ciudadano que no tenía ninguna responsabilidad en aquel delito que se le imputaba.

En síntesis, tal y como lo predica la Constitución Política de Colombia, Norma de Normas en nuestro Ordenamiento Jurídico, **TODO CIUDADANO SE PRESUME INOCENTE, HASTA QUE NO SE DEMUESTRE LO CONTRARIO**, y como se puede observar en los informes presentados por las Entidades Estatales, no había ningún indicio que permitiera quebrantar en lo más mínimo la inocencia del señor JONATHAN BARBOSA CASAS, **pues la cantidad de sustancia a estupefaciente hallada era irrisoria, no se halló en su poder, ni menos aún el material explosivo** y con los actos urgentes y las diligencias de arraigo, perfectamente se podía establecer que su presencia en el lugar de los hechos no era habitual o de costumbre sino que era circunstancial, y que simplemente se trataba de un consumidor de marihuana.

17. **FALLA** el Juez de Control de Garantías, al aceptar la solicitud hecha por la

Fiscalía de privar de la libertad en establecimiento carcelario al señor JONATHAN BARBOSA, por cuanto no era necesaria y no se cumplían los requisitos de Ley para tal fin.

Frente a la imposición de la medida de aseguramiento, la Corte Constitucional ha manifestado en sentencia C-695 DE 9 DE OCTUBRE 2013 M.P. NILSON PINILLA PINILLA, lo siguiente:

*“Así, se reconoce que la detención preventiva de una persona tiene un **carácter excepcional**, como quiera que el numeral 3° del artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 consagra que la “prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general”, de modo que como se reiteró en la sentencia C-774 de 2001, ya referida, se hace necesario que el legislador colombiano señale los motivos que lleven a esa clase de restricción, dentro del ordenamiento jurídico interno.*

(...)

**EXIGENCIAS DEL ARTÍCULO 308 DE C.P.P. PARA IMPONER MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO.**

*Para tal efecto, el artículo 308 ibídem exige como presupuesto que de los elementos materiales probatorios y de la evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes presupuestos: (i) **que la medida se muestre como necesaria para evitar la obstrucción al debido ejercicio de la justicia;** (ii) **que el sujeto de la medida constituye peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima;** y, (iii) **que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso “o que no cumplirá la sentencia”.***

Exigencias que no se cumplieron en el presente caso, tal como pasa a verse:

- i.) En cuanto a la obstrucción al debido ejercicio de la justicia, resulta imposible que este ciudadano pudiese obstruir de alguna manera el aparato jurisdiccional, dado que los elementos materiales de prueba recolectados como la sustancia estupefaciente y el material explosivo incautado reposaban en poder de las autoridades, quienes solo debían seguir en curso su investigación, la cual igualmente iba a arrojar el mismo resultado, la inocencia del señor BARBOSA CASAS, tal y como quedará demostrado durante el desarrollo del presente escrito.
- ii.) Frente al segundo requisito, en este caso particular, queda plenamente demostrado que el señor BARBOSA CASAS no representaba un peligro para la sociedad, ya que se trata de un ciudadano trabajador, cumplidor de

su deber, quien quería salir adelante con su familia y una persona que era miembro productivo de la sociedad, el cual nunca debió ser judicializado, su conducta no está tipificada en la Ley como delito, por el contrario, si se le consideraba como consumidor habitual de sustancias estupefacientes debió ser sujeto de un tratamiento especial por parte del Estado, brindándole un acompañamiento y no agravando su problema al privarlo injustamente de la libertad en un establecimiento carcelario.

- iii.) El presupuesto de que el imputado no compareciera al proceso no se vislumbra, puesto que a través de los informes de arraigo, se logró determinar que el señor JONATHAN BARBOSA residía en un lugar diferente a donde se efectuó la captura, lo cual era indicativo de que este ciudadano, no habitaba en ese inmueble, y que probablemente se encontraba de forma circunstancial en éste sitio, en vista de que no habían elementos probatorios o evidencias físicas que revelaran lo contrario, además los hallazgos efectuados por la Policía hasta este momento jurídico procesal, no podían señalar al entonces imputado como coautor de los delitos endilgados por la Fiscalía, ya que éstos no se encontraron en su posesión al momento de la aprehensión, imposibilitándosele al Juez de Control de Garantías inferir razonablemente la comisión delictiva del hoy demandante y considerar que éste había provocado un daño a los bienes jurídicamente tutelados; de igual forma un ciudadano que llevaba muchos años viviendo con su familia y trabajando en la misma localidad de Tuluá podía perfectamente comparecer al proceso, sin necesidad de limitar su derecho a la libertad.

**FALLA** el Fiscal de turno al hacer una imputación y solicitar la medida de aseguramiento en contra de JONATHAN BARBOSA cuando eran claras las circunstancias específicas del asunto, y era que el señor BARBOSA CASAS se encontraba en el lugar y en el momento equivocados cuando ocurrieron los hechos, pues casualmente fue a visitar un amigo, y dentro de la visita consumieron marihuana de forma tranquila y sin incomodar a nadie, cuando se encontró con el desenlace que ya se conoce, situación que fue puesta de presente ante la Fiscalía cuando el señor **VALENCIA TORRES morador de la casa allanada así lo confirmó**, de tal forma que **no existía evidencia física o**

elementos materiales probatorios que justificaran que el señor JONATHAN BARBOSA tuviera la más mínima relación con el hecho delictivo imputado, y mucho menos que fuera un peligro para la sociedad, razón por la cual no estaba en la obligación de soportar la privación de la libertad de la que fue objeto. (VER PRUEBA 3 – EXPEDIENTE PENAL – INTERROGATORIO FORMULADO AL SEÑOR JHONY ALEXANDER VALENCIA TORRES FOLIOS 43 A 46)

**FALLA** el juez de Control de Garantías, al hacer caso omiso a las situaciones fácticas que ocurrieron en el allanamiento del 10 de abril de 2015, donde queda de presente que en el momento de los hechos se cuenta solamente con la presencia circunstancial de JONATHAN BARBOSA y no con otro elemento que lo vincule a la coautoría de los mismos, pues ni la droga estupefaciente, ni el material explosivo se encontraban en su poder; y mucho menos era el propietario del inmueble sujeto a registro y allanamiento.

Aunado a lo anterior, en el presente caso se presenta una gravísima FALLA ADMINISTRATIVA POR PARTE DE LAS ENTIDADES LEGITIMADAS EN LA CAUSA POR PASIVA, pues son claros los informes de allanamiento presentados por la Policía Judicial, (VISIBLES A FOLIOS 18 AL 28 DE LA PRUEBA 3 - EXPEDIENTE PENAL) desde el mismo momento en que se presenta la captura, al indicar que la droga encontrada no estaba en poder del señor JONATHAN BARBOSA CASAS, y era el deber del Ente acusador demostrar que aquel ciudadano tenía responsabilidad de alguna forma en aquel delito.

**18.** Es pertinente resaltar en este punto que, para la fecha de la presentación de esta demanda, no se ha obtenido respuesta completa del derecho de petición instaurado ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Buga, Valle, donde se solicitó copia simple de todo el expediente a nombre de JONATHAN BARBOSA CASAS y copia de los audios y/o videos de las audiencias celebradas en el proceso penal anteriormente descrito, ya que la respuesta dada por el Juzgado Penal Especializado fue incompleta, toda vez que se omitió el envío de los audios y/o videos de las audiencias preliminares (legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento). Es así, que comedidamente su Señoría se le pedirá en el acápite de “Pruebas que se solicitan” para que se oficie

al Juzgado Primero Penal Especializado de Buga con el objeto de que remita con destino al presente proceso, copia de los audios y/o videos de las audiencias preliminares celebradas, a fin de precisar los detalles correspondientes de dichas diligencias. (VER PRUEBA 5 - CONSTANCIA DE ENVÍO DEL DERECHO DE PETICIÓN INSTAURADO ANTE EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BUGA, VALLE DEL CAUCA)

19. Después de las audiencias preliminares, en desarrollo del plan metodológico de la Fiscalía, a efectos de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los presuntos hechos delictivos, se realiza interrogatorio a cada una de las personas imputadas, en ellas el día 06 de julio de 2015 el señor JHONY ALEXANDER VALENCIA TORRES indica que él es quien reside en la vivienda donde fue hallada la evidencia física incautada, también expone que esos elementos los tenía él en el momento en que llegaron sus dos amigos y que ellos desconocían la existencia tanto de la sustancia estupefaciente como de la granada de fragmentación, ya que se habían presentado ahí para fumar marihuana., el señor VALENCIA TORRES rindió su declaración ante el funcionario de la Policía Judicial así:

*“(...) PREGUNTADO: ¿Qué fue lo que paso ese viernes 10 de abril de 2015? CONTESTÓ: (...) como a las 8:00 llegó JONATHAN y yo le abrí por la puerta del patio, iba solo (...) **no llevaba droga**, como a los cinco minutos llegó ROBINSON e ingresó por la puerta del patio, él llevaba dos cigarrillos de marihuana que había adquirido en la calle y nos pusimos a consumir los baretos, cuando se escuchó que tumbaron la puerta de la casa los de la SIJIN y nosotros nos dimos cuenta que era la Policía y como teníamos esos dos cigarrillos intentamos escondernos. JONATHAN y ROBINSON arrancaron primero que yo hacía la parte de atrás del patio (...) **yo era el último y tenía un bolsito negro de mano, dentro del cual estaba la granada y del susto llegué y tiré el bolso hacia atrás, el bolso estaba sin cierre**, los de la SIJIN nos agarraron (...).*

*PREGUNTADO: ¿En el patio había una caneca de basura?*

*CONTESTÓ: Si señora, una plástica, estaba al lado del lavadero, que era donde estábamos nosotros y **allí encontraron la granada que se había salido del bolso que yo tenía y que como repito estaba sin cremallera.***

*PREGUNTADO: ¿Qué me dice de la bolsa que encontraron con las envolturas?*

*CONTESTÓ: **Esa bolsa era transparente y tenía 80 baretos de marihuana, son míos de mi consumo, yo la tenía enterrada donde estábamos, había un poco de basura y yo***

**la había metido dentro de la basura** y por eso es que yo digo que es como si estuviera enterrada. Ese es mi consumo cada vez que me iba para el río esa es la forma de distraer. En la casa de mi tía todos somos consumidores. (...)

PREGUNTADO: ¿Qué relación tienen ROBINSON y JONATHAN con lo que se halló en su casa?

CONTESTÓ: **Ellos no sabían nada ni de la granada, ni de la bolsa.** Los tres estábamos reunidos **pero la granada yo la tenía en un bolso** y donde yo estaba parado lo tenía en el piso y con los pies la tapaba. La granada la tenía porque sacando arena del río la encontré a la orilla enterrada (...) Pero **los muchachos ROBINSON y JONATHAN no sabían nada de eso. La bolsa con las envolturas ellos tampoco sabían porque estaba enterrada dentro de la misma basura y en medio de toda esa basura yo guardé esa bolsa, yo mismo armaba esas papeletas para consumo**, pero no vendía, me dura el mes aproximadamente.

PREGUNTADO: ¿Usted es consiente que cometió dos delitos, uno conservar una granada que es de uso exclusivo de las fuerzas militares y también conservar esas envolturas de marihuana?

CONTESTÓ: Si señor, **por eso yo estoy aceptando los cargos, los muchachos no tienen nada que ver en eso, eso era solo mío** y me quiero acoger a los beneficios que me da la ley.” (VER PRUEBA 3 – EXPEDIENTE PENAL – INTERROGATORIO FORMULADO AL SEÑOR JHONY ALEXANDER VALENCIA TORRES FOLIOS 43 A 46)

Se puede apreciar en este punto con la declaración del señor VALENCIA TORRES, que las acciones desplegadas por el señor JONATHAN BARBOSA de ninguna manera constituían un delito, simplemente se encontraba en el momento en que los agentes del Orden ingresan a la vivienda de su amigo y encuentran en dicha residencia la evidencia física incautada, sin que se pudiera inferir que era coautor de la conducta delictiva endilgada por la Fiscalía, es decir, el señor JONATHAN BARBOSA era una persona ajena al hecho ilícito que se atribuyó el señor VALENCIA TORRES, quien aceptó que la droga y la granada hallada dentro del inmueble le pertenecían, y que los demás capturados, solamente estaban consumiendo marihuana.

20. Así mismo, JONATHAN BARBOSA CASAS y ROBINSON JIMÉNEZ HENAO mediante interrogatorio realizado por la Policía Judicial, señalaron que no sabían de la existencia ni de la sustancia estupefaciente, ni de la granada de fragmentación antes de realizarse la diligencia de allanamiento, y que solamente tuvieron conocimiento de estos elementos, después de ser capturados y por los comentarios de los Policías que los aprehendieron ese día 10 de abril de 2015.

(VER PRUEBA 3 – EXPEDIENTE PENAL – INTERROGATORIOS FORMULADOS A LOS SEÑORES JONATHAN BARBOSA CASAS Y ROBINSON JIMÉNEZ HENAO FOLIOS 48 AL 56)

**21.** Posteriormente, la Defensa del imputado BARBOSA CASAS allega al expediente penal declaraciones y constancias en las que familiares, amigos, vecinos, empleadores y personas conocidas, dieron fe de que JONATHAN BARBOSA CASAS, es una persona que realizaba actividades lícitas y que no residía en el barrio San Francisco, que tenía relaciones familiares bien conformadas, que se dedicaba a actividades laborales como auxiliar de construcción, el cual no tenía ningún tipo de vinculación con organizaciones ilícitas, por el contrario, se apreciaba como un ciudadano respetuoso y no representaba un peligro para la sociedad. (VER PRUEBA 3 – EXPEDIENTE PENAL – DOCUMENTOS CONTENTIVOS A FOLIO 73 Y FOLIOS 80 HASTA EL 87).

**22.** Con todo, la Fiscal 3° Especializada de Buga, el **08 de julio de 2015** solicitó audiencia de preclusión en el proceso penal adelantado en contra JONATHAN BARBOSA CASAS y ROBINSON JIMÉNEZ HENAO, toda vez que era notorio que el señor JHONY ALEXANDER VALENCIA TORRES era quien habitaba en la residencia objeto de allanamiento, y que la evidencia física incautada por las autoridades estaba únicamente en posesión del señor VALENCIA TORRES, así mismo del señor JONATHAN BARBOSA CASAS se podía constatar que éste desconocía la existencia tanto de la sustancia estupefaciente como de la granada de fragmentación, por tanto, no había elementos materiales probatorios contundentes para llevarlo a juicio. (VER PRUEBA 3 – EXPEDIENTE PENAL – SOLICITUD DE PRECLUSIÓN DEL 8 DE JULIO DE 2015 FOLIOS 1 A 3)

**23.** El día **14 de octubre de 2015** es celebrada la audiencia de **PRECLUSIÓN, 96 DÍAS después de que el representante del Ente acusador presentara la solicitud de dicha audiencia por escrito.** Es menester mencionar que, la audiencia de PRECLUSIÓN debe celebrarse en un término de **5 días**, contados a partir de la solicitud que el Fiscal haga al Juez, tal y como lo expresa el Código de Procedimiento Penal en su artículo 333:

*“Artículo 331. **Preclusión.** En cualquier momento, a partir de*

*la formulación de la imputación el fiscal solicitará al juez de conocimiento la preclusión, si no existiere mérito para acusar.”*

(...)

**“Artículo 333.Trámite. Previa solicitud del fiscal el juez citará a audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, en la que se estudiará la petición de preclusión.”**

Como corolario de lo anterior, es evidente como se vulneraron términos y disposiciones legales, que fueron consagradas en pro de garantizar los derechos de los investigados dentro del proceso penal, pues el legislador previó la imposibilidad de someter a un ciudadano a la incertidumbre de que se lleven o no a cabo las diferentes instancias del proceso, pues ésta situación va completamente en contra de lo perseguido por los fines esenciales del Estado, peor aun cuando se encuentra privado de la libertad un ciudadano inocente. Lo que deja entrever los errores judiciales y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

24. El día 14 de octubre de 2015, la Fiscal de turno en audiencia de solicitud de preclusión manifestó que, en virtud a un preacuerdo celebrado entre el señor JHONY ALEXANDER VALENCIA TORRES y la Fiscalía, al ciudadano en mención se le había proferido en su contra sentencia de carácter condenatorio por los hechos investigados, y en razón a que había otras dos personas conjuntamente procesadas (JONATHAN BARBOSA CASAS y ROBINSON JIMÉNEZ HENAO), por tal razón se avizó la ruptura de la unidad procesal, cambiando de esta forma el código de investigación para ésta audiencia de preclusión. (ESCUCHAR PRUEBA 4 – AUDIENCIA DE PRECLUSIÓN – DESDE EL MINUTO 2:14 HASTA EL 3:34).

25. Continuando con la audiencia de preclusión ante el Juez Penal Especializado, la representante de la Fiscalía argumentó que la solicitud de preclusión en favor de JONATHAN BARBOSA se basaba en las constancias emitidas por la Empresa Obra Civil Colombia S.A.S., donde laboró el señor JONATHAN BARBOSA CASAS entre el 15 de julio de 2014 al 15 de abril de 2015, igualmente mencionó la constancia que emitió el señor NÉSTOR VASTO en la que indicó que el señor BARBOSA CASAS fue su ayudante de construcción, asimismo el señor HERNANDO VÉLEZ BALDERRAMA brindó una constancia sobre la calidad

humana, buenos modales y buenas costumbres de las que tiene conocimiento del señor JONATHAN BARBOSA CASAS y de igual forma se hizo alusión a la constancia suscrita por LUIS ERNESTO QUIROZ HERNÁNDEZ en la cual indica que el entonces imputado laboraba desde enero de 2013 hasta marzo de 2015 como ayudante de construcción; además la Fiscal se refirió a la declaración extra-juicio de los señores EDIMER VÁSQUEZ GIRALDO y LINDI DAYANA LOAIZA REYES quienes manifestaron que JONATHAN BARBOSA es una buena persona, buen vecino, no tiene conflictos y su padre ANCÍZAR BARBOSA depende de él; así pues ante estos soportes documentales, sumado a los elementos materiales probatorios recaudados en la investigación, la entonces representante del Ente acusador reconoce que:

*“(...) efectivamente hay prácticamente un solo indicio de presencia en la vivienda objeto de allanamiento, que como lo dice inclusive el policía en su declaración, **no se estableció exactamente la relación que ellos tenían con la evidencia física**, que hubo una aceptación respecto a que esas evidencias que fueron halladas pertenecían a JHONY ALEXANDER VALENCIA TORRES, quien era el que las conservaba o las tenía en su poder, que **son estas dos personas ajenas a los hechos por los cuales fueron capturados y al no existir esa relación de causalidad clara, y toda vez que debe tenerse una probabilidad respecto a la responsabilidad de ellos en estos hechos**, es que la Fiscalía presentó el respectivo escrito de preclusión” (ESCUCHAR PRUEBA 4 – AUDIENCIA DE PRECLUSIÓN DESDE EL MINUTO 19:09 HASTA EL 21:30)*

De lo anotado se destaca la forma como la Fiscalía con información contenida en unas constancias laborales y una declaración extra-juicio, sustentó ante el Juez de Conocimiento la preclusión de la investigación con datos y hechos relevantes que debió constatar desde un inicio con la ejecución de unos adecuados actos urgentes; así pues, el Ente acusador trae a colación que aquello que argumentó en la solicitud de medida de aseguramiento ante el Juez de Control de Garantías ya no es su hipótesis para responsabilizar al entonces imputado, y que por el contrario, después de **184 días** de privación injusta de la libertad del señor BARBOSA CASAS,

corroborar que sí se trataba de un buen ciudadano, que solo se encontró en el lugar y en el momento equivocado, como quedó de presente desde el momento en que se presentó su injusta captura.

Es evidente que la Fiscalía acepta la serie de errores y la injusticia tan grande que cometió con JONATHAN BARBOSA CASAS, al sostener que los elementos probatorios llevaban a una inferencia lógica y razonable de que, solo se tuvo el indicio de la presencia de BARBOSA CASAS en la vivienda objeto de allanamiento, y no se estableció una correlación entre la granada de fragmentación y el gramaje de marihuana encontrado con el entonces imputado, es decir nunca hubo un nexo causal; asimismo como si no se tratara de un ser humano, encuentra muy fácil el Ente investigador simplemente decir, que no tiene elementos materiales probatorios y olvida el calvario que tuvo que padecer mi representado y su familia por el **ERROR** de ésta Entidad Estatal al solicitar la medida de aseguramiento, porque según la Fiscalía era un peligro para la sociedad, cuando de los elementos probatorios aducidos en las audiencias preliminares se podía inferir que el material incautado no tenía relación con el señor JONATHAN BARBOSA.

26. En la misma audiencia de preclusión instalada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Buga, fue resuelta la solicitud donde se decretó la preclusión de la investigación que se adelantaba en contra del señor JONATHAN BARBOSA CASAS por el delito de TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS, MUNICIONES DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS O EXPLOSIVOS en concurso CON FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ESTUPEFACIENTES con fundamento en lo estipulado en el artículo 332 del C.P.P. en la causal sexta **IMPOSIBILIDAD DE DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**. En esta oportunidad el señor Juez sustentó su decisión de la siguiente manera:

***“(…) Que la Policía Judicial llegó al sitio, únicamente con la información anónima de una persona que indicaba que allí se estaban expendiendo sustancias alucinógenas, sin determinar ningún tipo de responsabilidad individual o de qué tipo de personas eran las que se dedicaban a este ilícito (…)”***

***“(…) Del conjunto de estos elementos y analizado obviamente bajo el tamiz de la sana crítica, se puede inferir evidentemente que no se cuenta más que con la presencia de ellos al momento del allanamiento, con otro elemento o circunstancia que los vincule a la coautoría de estos hechos y es evidente entonces que, esa presencia queda explicada con la narración que hace el señor JHONY ALEXANDER VALENCIA***

TORRES y la propia de JONATHAN BARBOSA CASA y ROBINSON JIMÉNEZ HENAO como personas que iban a hacer consumo de sustancias alucinógenas en esa mañana. Es el mismo JHONY ALEXANDER quien acepta su responsabilidad indicando que **SUS amigos no conocían, ni sabían de la existencia de estos objetos, no tiene la Fiscalía un elemento determinante para vencer en juicio la presunción de inocencia de estas dos personas,** además pues en lo que sanamente puede realizar la fiscalía ha agotado lo razonablemente posible para analizar y determinar esa responsabilidad y para este caso de JONATHAN BARBOSA CASAS y ROBINSON JIMÉNEZ HENAO es negativa, **sencillamente se encontraban en el lugar al momento del allanamiento es decir el día 10 de abril del año 2015 8:30 de la mañana.**

**“En ese entendido evidentemente procede la causal de preclusión prevista en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal numeral 6 imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia** porque con los elementos que se han recolectado **no es posible determinar en grado alguno la responsabilidad de ellos en estos hechos, sencillamente su presencia al momento del allanamiento es lo que vincula su captura,** pero la explicación de JHONY ALEXANDER VALENCIA TORRES resulta aceptable y creíble pues, los retira de algún tipo de responsabilidad sobre los mismos, en ese orden de ideas el Juzgado Penal del Circuito Especializado de **Buga precluye la investigación en favor de JONATHAN BARBOSA CASAS y ROBINSON JIMÉNEZ HENAO como coautores responsables del delito de fabricación, porte de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos y tráfico o porte estupefacientes por los hechos ocurridos el 10 de abril del año 2015 en el Barrio San Francisco de la ciudad de Tuluá (...) declaramos en firme la anterior decisión, ordenamos se remitan las comunicaciones de ley...**” (ESCUCHAR PRUEBA 4 - AUDIENCIA DE PRECLUSIÓN DEL 14 DE OCTUBRE DE 2016 DESDE EL MINUTO 24:20 HASTA EL 30:05)

En esta oportunidad el señor Juez de Conocimiento, le da la razón a cada uno de los argumentos esbozados en el presente escrito, en el sentido de **que fueron la Fiscalía y el Juez de Control de Garantías quienes se apresuraron a solicitar e imponer la medida de aseguramiento al señor JONATHAN BARBOSA CASAS.**

24. Acorde con lo narrado en este supuesto fáctico, resulta clara la PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD a título de error jurisdiccional y defectuoso

funcionamiento de la administración de justicia, pues al rompe, se observa que la presencia del procesado en el lugar de los hechos es eminentemente circunstancial, no tuvo nada que ver con la comisión del delito investigado y mucho menos se configuraban los requisitos establecidos por la Ley 906 de 2004 para privar de la libertad a un ciudadano, y lo que es peor, en un establecimiento carcelario del País, donde existen situaciones de hacinamiento, violaciones a derechos humanos, humillaciones e inmencionables vejámenes a los que son sometidos los internos.

Mi representado tuvo que esperar **89 días** para que el Fiscal se diera cuenta de su error y solicitara la preclusión (hasta el 08 de julio de 2015) y **96 días** más para que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Buga realizara la audiencia y decretara la tan anhelada preclusión, para un total de **185 días,**  
**ESTO ES 6 MESES 5 DÍAS.**

Salta a la vista la deficiente labor investigativa por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ¿cómo ha de ser posible que una diligencia tan importante como lo es llenar la información contenida en el formato de arraigo socioeconómico, que sirve para llevar al Juez de Control de Garantías al conocimiento de que tipo de persona se está judicializando, y de esa manera determine si en realidad el imputado constituye un peligro para la sociedad y defina con esto si debe privarlo de la libertad o no, **es aportado con espacios en blanco?**, con la observación de que dicho formato es diligenciado con información brindada por el mismo capturado, ya que no hay personas que la puedan aportar, cuando debieron los funcionarios públicos, simplemente acudir al domicilio de Jonathan, entrevistar a su padre, a su madre o sus vecinos, averiguar con quien vivía, donde y con quien trabajaba, constatar las referencias personales del indiciado, etc. denotándose la desidia por parte de la Fiscalía al realizar labores que son de su pleno deber como Ente Investigador, lo que hace más gravosa la **FALLA** de esta Entidad Estatal. (VER PRUEBA 3 – EXPEDIENTE PENAL – FORMATO DE ARRAIGO DEL SEÑOR JONATHAN BARBOSA CASAS FOLIO 32 A 34)

27. Con lo anterior, se nota la omisión de una buena investigación por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, que cuenta con todos los recursos económicos y humanos, pero que al pasar por alto su deber investigativo, inicia y

da lugar a una responsabilidad patrimonial del Estado; es también la omisión por parte de los representantes de la RAMA JUDICIAL, de darle una correcta valoración al material probatorio que aporta la Fiscalía al momento de solicitar la privación de la libertad de una persona, y en lugar de exhortar a la Fiscalía para que adelante unos adecuados actos urgentes, le trasladó la carga de la prueba a mi defendido. Es por esto que son responsables del tiempo de privación que mi PROHIJADO JAMÁS PODRÁ RECUPERAR.

28. Esta privación de la libertad orquestada por la Fiscalía y avalada por la Rama Judicial, ocasionó una serie de daños patrimoniales y extrapatrimoniales que deben ser indemnizados, a raíz de lo injusto de dicha privación. **INSISTO, BRILLA POR SU AUSENCIA LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA EN CABEZA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.**

29. La Fiscalía General de la Nación a lo largo del proceso penal iniciado en contra del señor JONATHAN BARBOSA CASAS, transgredió los artículos 66 y 114 de la Ley 906 de 2004, en consideración a que omitió su deber INVESTIGATIVO, lo que trajo como consecuencia la PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD del mencionado, pues previo a solicitar la medida de aseguramiento, se debieron adoptar unos adecuados ACTOS URGENTES, que permitieran recaudar la totalidad de elementos materiales de prueba, para así lograr acreditar o desvirtuar la responsabilidad en la conducta punible, más allá de toda duda razonable. Lo que más asombra, es el hecho de que una persona que trabaja humilde y honradamente, haya tenido que pasar por todo un proceso penal iniciado de manera injusta y arbitraria por parte de LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA RAMA JUDICIAL, con ocasión al actuar negligente y descarado de sus funcionarios.

De esta forma quedó declarada de manera oficial la INOCENCIA del señor JONATHAN BARBOSA CASAS y es menester hacer hincapié sobre la privación injusta de la libertad de la que fue objeto, que se configuró entre el 10 de abril del 2015 y el 15 de octubre de 2015, es decir **185 días, ESTO ES 6 MESES 5 DÍAS,** en los cuales sufrió todo tipo de vejámenes, con todas las implicaciones que esto le acarreó, así como la tristeza que le embargaba al estar lejos de su familia, de sus hijos menores de edad, de su padres, de su hermano y

compañera permanente, sabiendo que desde un principio no tenía por qué estar privado de su libertad, situaciones que el procesado no estaba en la obligación de soportar. (VER PRUEBA 2 – EXPEDIENTE DEL INPEC – CERTIFICADO DE LIBERTAD).

30. El daño que el Estado le ocasionó al aquí demandante y a su familia debe ser calificado como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación para el Estado de resarcir los daños causados a éstos.

31. El día **6 de octubre de 2017** se radicó ante la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos de Cali-Valle, la respectiva solicitud de conciliación como requisito de procedibilidad para incoar la presente demanda.

32. El día **30 de octubre** de 2017 siendo las 10:00 am. en el Despacho de la Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali-Valle, se procedió a iniciar con la audiencia de conciliación solicitada, diligencia en la que quedó clara la posición de las partes ahora demandadas de NO CONCILIAR, razón por la que se levantó el acta correspondiente, quedando así cumplido el requisito de procedibilidad de la presente acción administrativa. (VER ANEXO 6 – CONSTANCIA DE NO CONCILIACIÓN).

### FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES

La responsabilidad patrimonial del Estado, se encuentra consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, el cual dispone:

**“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.**

*En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra...”*

La Corte Constitucional ha considerado como elementos de responsabilidad del Estado los siguientes: “...Con fundamento en este postulado de principio, el instituto resarcitorio se configura siempre y cuando: (i) ocurra **un daño antijurídico o lesión**, (ii) **éste sea imputable a la acción u omisión de un ente público** y (ii) **exista una relación de causalidad entre el daño y la acción u**

**omisión del ente público**; ampliándose de este modo el espectro de la responsabilidad estatal al superar el postulado inicial de la falla en el servicio, para adentrarse en el ámbito del **daño antijurídico**-entendido como aquél daño patrimonial o extrapatrimonial que se causa en forma lícita o ilícita al ciudadano, **sin que éste se encuentre en la obligación jurídica de soportarlo**.” (Subrayado y negrilla fuera de texto)<sup>4</sup>

En el derecho Español, se establece una cláusula de responsabilidad del Estado, similar a la contenida en el artículo 90 de nuestra Constitución Política, al respecto la doctrina internacional ha manifestado: “...*Está claro también y no es objeto de discusión alguna que la responsabilidad patrimonial de la administración puede surgir tanto de una actividad jurídica, ya se plasme en un acto administrativo o en un reglamento, como de una actividad puramente material o técnica o, incluso, de una simple omisión. Cada uno de estos supuestos puede dar lugar, ciertamente, a particularidades y justificar matizaciones de diverso tipo, pero el principio en sí mismo no es discutible.*”<sup>5</sup>.

Es importante y pertinente recalcar que las decisiones de los Jueces de la República, deben fundarse en las pruebas legalmente aportadas y debatidas en el proceso. Al respecto, el Código de Procedimiento Penal estipula en su artículo 7, como principio fundamental del proceso penal colombiano que **“para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad más allá de toda duda”**; de igual manera el artículo 381 del Código de procedimiento penal ordena que **“para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, a cerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio”** (negrilla propio)

Requisitos que no son otros que el convencimiento no solo en la materialidad de la conducta punible, sino en la responsabilidad del procesado, por ello, es menester reiterar, que en el presente caso el Ente acusador en ningún momento del proceso logró demostrar la responsabilidad penal del señor JONATHAN BARBOSA CASAS, tal y como lo manifestó el Juez de Conocimiento al momento de fundamentar su decisión de precluir la investigación en favor del señor BARBOSA CASAS:

*“...Del conjunto de estos elementos analizados bajo el tamiz de la sana critica, se puede inferir evidentemente que no se cuenta más que con la presencia de ellos*

<sup>4</sup> Sentencia C-619 de 2002

<sup>5</sup> EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA – TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ. Curso de Derecho Administrativo Tomo II. 12ª. Ed. Bogotá: Editorial Temis. 2008, pp. 359.  
La libertad es un

*al momento del allanamiento, con otro elemento u otra circunstancia que los vincule a la coautoría de estos hechos, y **es evidente entonces que esa presencia queda explicada con la narración que hace el señor JHONY ALEXANDER VALENCIA TORRES y la propia de JONATHAN BARBOSA CASAS** y ROBINSON JIMÉNEZ HENAO, **como personas que iban a hacer consumo de sustancias alucinógenas en esa mañana**, es el mismo JHONY ALEXANDER quien acepta su responsabilidad explicando que sus amigos no conocían ni sabían de la existencia de estos objetos, por lo tanto pues, **no tiene la fiscalía un elemento determinante para vencer en juicio la presunción de inocencia de estas dos personas(...)***

Como consecuencia de esto se obtiene la preclusión y por ende la extinción de la acción penal, por lo que este caso se debe analizar bajo **el régimen objetivo de responsabilidad del Estado**. Tal y como lo ha indicado de manera clara y concreta el H. Consejo de Estado mediante **sentencia de unificación** en Sala Plena de la Sección Tercera, expediente 23.354, del 17 de octubre de 2013, Consejero Ponente MAURICIO FAJARDO GÓMEZ, en la que se refiere específicamente al régimen de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad resueltos con fundamento en alguna de las causales contempladas en el derogado decreto ley 2700 de 1991, artículo 414.

*“Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o **su equivalente** porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.*

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo.

*Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.*

**“2.3 Régimen de responsabilidad aplicable en materia de privación de la libertad de las personas sujetas a detención preventiva dentro de un proceso penal, a quienes posteriormente se exonera de responsabilidad mediante sentencia absolutoria o pronunciamiento equivalente.”**

***“La Sala amplió la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente con base en un título objetivo de imputación, a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos –cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la respectiva medida de aseguramiento”***

Continuando con la sentencia del Honorable Consejo de Estado en cita, se lee:

**(..)una clara tendencia orientada a allanar el camino hacia la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, en línea de principio, a supuestos en los cuales una persona se ve privada de la libertad por orden de autoridad judicial dentro de un proceso penal y posteriormente resulta exonerada de responsabilidad dentro de dicho plenario, particularmente cuando la aludida exoneración encuentra sustento en la duda que debe ser resuelta en favor del sindicado**

En ese mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia del 4 de diciembre de 2006, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Radicado: 25000-23-26-000-1994-09817-01, expediente: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua Panche y otros. Demandado: Nación-Ministerio de Justicia, en la cual se expresó que:

***“...aunque la medida de aseguramiento se hubiere proferido con estricto apego a las exigencias y requisitos establecidos en las normas vigentes, la posterior absolución del procesado determina que, salvo que se acredite la concurrencia de una causal eximente de responsabilidad como el hecho exclusivo y determinante de la víctima, ésta no tiene el deber jurídico de soportar los daños que la detención le irroga, “[Y] esa consideración no se modifica por el hecho de que la absolución se haya derivado de la aplicación del multicitado principio “in dubio pro reo”, pues la operatividad del mismo en el sub júdice no provee de justo título —ex post— a una privación de libertad por tan prolongado período, si el resultado del proceso, a su culminación y de cara a la situación del aquí demandante, continuó siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido: no pudo desvirtuarse que se trataba de una persona inocente”***

En concordancia con lo expuesto, resulta lo suficientemente claro para el Honorable Despacho que el TITULO DE RESPONSABILIDAD aplicable al caso particular y concreto del señor JONATHAN BARBOSA CASAS, no es otro que el régimen de responsabilidad objetivo, al haberse edificado su libertad en la **causal del numeral 6 del artículo 332 del C.P.P. esto es imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia**, por lo cual se produjo un daño antijurídico que debe ser resarcido, como consecuencia de los perjuicios ocasionados a los hoy demandantes, derivados de la medida de aseguramiento decretada sobre el señor BARBOSA CASAS.

Específicamente, en el tema de responsabilidad del Estado estructurado en el artículo 90 Constitucional, en tratándose de casos de privación injusta de la libertad ha dicho:

*“No resulta constitucionalmente viable ni argumentativamente plausible, en consecuencia, sostener que un precepto con fuerza de ley —como el Decreto 2700 de 1991, concretamente en su artículo 414— pudiere contar con la virtualidad necesaria para restringir los alcances que a la responsabilidad del Estado le vienen determinados directamente desde el artículo 90 de la Carta Política, pues según lo han señalado tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, los parámetros a los cuales se ciñe la responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas son los estructurados por el artículo 90 de la Carta, que pueden ser precisados, mas no limitados, por una norma infraconstitucional; en otros términos y “[E]n definitiva, no resultan compatibles con el artículo 90 de la Constitución, interpretaciones de normas infraconstitucionales que restrinjan la cláusula general de responsabilidad que aquel contiene por consiguiente, ni el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 ni alguna otra disposición de naturaleza legal podría constituir el fundamento único de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Tales dispositivos legales podrían precisar, pero de ninguna manera limitar y menos reemplazar la eficacia directa, vinculante y preferente de los dictados que contiene el artículo 90 de la Constitución Política”<sup>6</sup>*

Es que la detención preventiva representa la más intensa afectación al derecho a la libertad, por lo tanto, su aplicación debe ser excepcional, es decir y con base en la misma sentencia proferida por el Honorable Consejo de Estado, después de la vida es LA LIBERTAD el derecho fundamental máspreciado. Es por esta razón que siempre en un proceso penal el indiciado cuenta con la garantía fundamental de la presunción de inocencia.

<sup>6</sup> Sentencia 1997-01514 de abril 9 de 2014, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Radicación: 30879, Consejera Ponente: Olga Mélida Valle de De La Hoz, Actor: Elkin Alfonso Heredia Pérez y otros.

**“la presunción constitucional de inocencia, como garantía consustancial a la condición humana y de la cual, en este tipo de casos, el sindicado goza al momento de ser detenido, la mantiene durante todo el tiempo por el cual se prolonga su privación de la libertad y, en la medida en que nunca puede ser desvirtuada por el Estado, cuando se pone término, definitivamente, al procedimiento penal, la conserva incólume, de manera tal que, sin solución de continuidad, una persona a la que la Carta Política le atribuye y le ha mantenido, sin ambages, la condición de inocente, tuvo que soportar —injusta y antijurídicamente— quizás la más aflictiva de las restricciones a su derecho fundamental a la libertad”<sup>7</sup>**

Es que después de la vida, el derecho a la libertad constituye un fundamento y presupuesto indispensable para que resulte posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular todo individuo.

Siguiendo con nuestro análisis, el carácter de excepcionalidad de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, ha sido distinguido y reiterado en jurisprudencia, como se ve en la sentencia de unificación referenciada del 17 de octubre de 2013, en este caso la sentencia predica que **“en modo alguno podría exigírsele a un individuo que asuma como una carga social normal o jurídica una situación que por definición es excepcional”**, ya que si se realiza se demuestra la antijuridicidad de daño irrogado al detenido que posteriormente es absuelto de responsabilidad.

En este sentido, y a manera de conclusión, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado que ha sido privado de la libertad finalmente es absuelto o **se precluye** la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que **“i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica.**

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada por la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente, frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico, aunque el mismo se derive de la aplicación dentro del proceso penal respectivo, *del principio universal*

<sup>7</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez, 2 de mayo de 2007, Radicación número: 73001-23-31-000-1997-15879-01(15989), Actor: FANNY ORTEGON NAVARRO Y OTROS.

*in dubio pro reo* por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la labor investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, **lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso al reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de sopórtalos**". (...)

La libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo las condiciones de orden Constitucional o Legal; en el evento de restringir ese derecho; acorde a la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, promulgada el 15 de marzo de 1996 en su artículo 68 establece: **"Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios."**

Respecto del artículo en mención, el Consejero de Estado doctor Enrique Gil Botero, como ponente del fallo del 5 de junio de 2008 manifiesta:

*"...la Sala ha considerado que su interpretación no se agota en la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando ésta sea ilegal o arbitraria. **En jurisprudencia reciente<sup>8</sup>, se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, contempladas en el derogado artículo 414 del decreto 2700 de 1991, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad en las cuales se haya arribado a cualquiera de los tres supuestos a los que hacía referencia la citada disposición. Es decir, que después de la entrada en vigencia de la ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta 'porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible', se configura un evento de detención injusta. A las hipótesis citadas se les ha agregado el evento de absolución en aplicación del in dubio pro reo**"*

A su turno el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 establece:

**"ARTICULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.** El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

<sup>8</sup> Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2007, expediente: 15.463.

*En los términos del inciso anterior **el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.***” (Resaltado fuera del texto)

Al respecto, se lee la sentencia de unificación proferida la Sala Plena de la Sección Tercera, el 6 de abril de 2011, expediente 21.653, que señala:

“se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos consagrados en el artículo 414 del C.P.P., y en la Ley 270 de 1996”

Continuando con esta postura, en reciente sentencia proferida por el Honorable Consejo De Estado, con radicado No. 76001-23-31-000-2001-02770-02(33442), calendada 27 de enero de 2016, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA, se precisó:

“... en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o -en la opinión mayoritaria de la Sala- a la aplicación de la figura del *in dubio pro reo*, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a éstos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla.

(...) “En ese contexto, se concluye que, cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, por alguna de las causales previstas en el citado artículo 414 del C. de P. P. -sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima-, las cuales se aplican a pesar de la derogatoria de la norma, o -en la opinión mayoritaria de la Sala- por virtud del *in dubio pro reo*, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga” (...)

Siguiendo con nuestro análisis de la sentencia del año 2016, es importante resaltar lo dicho por el Consejo de Estado, frente a una privación injusta de la libertad cuando el ciudadano no ha cometido el delito:

*“(...) el criterio que rige actualmente los pronunciamientos de esta Corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es el de la procedencia del deber indemnizatorio cuando (i) el hecho no existió,*

(ii) el sindicado no lo cometió o (iii) la conducta no constituía conducta punible de conformidad con sentencia absolutoria o su equivalente:

(...) quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, **sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.** (subrayado propio)

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, **el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél.**

Es que **la privación de la libertad demanda una investigación eficiente, proclive a respetar el derecho constitucional fundamental del sindicado, por lo que si el Estado no obstante la inocencia, lo privó de su libertad, debe responder por los perjuicios ocasionados**

Cabe además señalar que la valoración de la sentencia penal absolutoria o su equivalente comporta la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 superior) en el entendido de que independientemente de las razones que se consignen en la providencia para justificar la decisión, ya sea con fundamento expreso de algunas de los eventos inicialmente previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 o del in dubio pro reo, se habrá de contrastar dicha providencia con las conclusiones a las que resulten de la lectura atenta del expediente, es decir, corresponde verificar si la decisión absolutoria que se apoya en un in dubio pro reo, oculta una de las causales establecidas en el artículo 414 ibídem.

Como puede observarse, dentro de la regla general consolidada jurisprudencialmente, la responsabilidad de la administración por la privación injusta de la libertad ha sido desarrollada de tal manera que, a menos que opere la causal de exoneración específica para estos eventos, como es el dolo o la culpa grave de la víctima, o en los términos del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuando “se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido”.

Con las nutridas citas jurisprudenciales puestas en conocimiento del Despacho, se llega a la conclusión que el caso objeto de *litis*, **debe ser analizado bajo un régimen de responsabilidad objetivo**, y que al ser dictada la respectiva PRECLUSIÓN en el caso del señor JONATHAN BARBOSA CASAS, **se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad**, el cual debe

ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política.

No obstante lo anterior, la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado<sup>9</sup> ha sido clara al señalar que cuando en el caso objeto de estudio se vislumbran FALLAS ADMINISTRATIVAS endilgables a las Entidades llamadas a responder administrativa y patrimonialmente, tal y como sucede en el caso particular y concreto en el que se presentó una PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD a título de ERROR JUDICIAL Y DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, debe primar el régimen de responsabilidad SUBJETIVO, esto es, el de FALLA EN EL SERVICIO, porque además de efectuarse una condena patrimonial, **DEBE HACERSE UN JUICIO DE REPROCHE FRENTE AL ACTUAR DE LAS ENTIDADES OBJETO DE DEMANDA**, así textualmente lo señaló en pronunciamiento del 25 de enero de 2017<sup>10</sup>:

***“Sin embargo, la Sala estima que, en este asunto, el régimen de responsabilidad aplicable es el de carácter subjetivo, dada la necesidad de, además de emitir una condena patrimonial en contra del Estado, efectuar un juicio de reproche sobre el proceder de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que, contrario a lo señalado en el recurso de apelación, la privación de la libertad del señor Flórez Pomares se ordenó pese a que no se cumplían los requisitos establecidos para tal fin(...)***

***En efecto, esta Subsección ha precisado que si la restricción de la libertad es consecuencia de una decisión judicial equívoca, la responsabilidad patrimonial del ente investigador surge bajo el título de imputación denominado error judicial y no por privación injusta de la libertad:***

***“3.3.- Con fundamento en lo hasta ahora expuesto y traído a colación de la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a los alcances de los títulos de imputación de error jurisdiccional y de privación injusta de la libertad,***

<sup>9</sup> Al respecto se leen las siguientes sentencias: 25 de enero de 2017 M.P. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Rad. No. 17001-23-31-000-2005-02622-01(44963), sentencia del 30 de junio de 2016, M.P. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Rad. No. 73001-23-31-000-2006-00379-01(40720), sentencia del 25 de enero de 2017, M.P. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Rad. No. 47001-23-31-000-2008-00378-01(45343),

<sup>10</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, 25 de enero de 2017, Radicación número: 47001-23-31-000-2008-00378-01(45343), Actor: LUIS EMIGDIO FLÓREZ POMARES Y OTROS, Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

esta Sala considera que en aquellos eventos en los cuales los daños cuya reparación reclaman los ciudadanos tienen origen en un error contenido en la providencia judicial mediante la cual se ordenó una medida de aseguramiento que conduce a la privación de la libertad del(los) sindicado(s), si bien es verdad que podría pensarse que el efecto al cual conduce la materialización de lo decidido en la providencia respectiva –la restricción de la libertad física de la persona– determina que ha de ser el de privación injusta de la libertad previsto en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 el título de imputación a aplicar, lo cierto es que el encarcelamiento del individuo investigado no habría tenido lugar en caso de no haberse dictado, dentro del proceso penal respectivo, la decisión en la cual concurre la particularidad de resultar ‘contraria a la ley’, en los términos de lo normado en la última frase del artículo 66 de la Ley 270 de 1996.

“Quiere lo anterior significar que, a juicio de la Sala, en aquellos eventos en los cuales se produce una falla en el servicio público de Administración de Justicia consistente en que se profirió una providencia judicial mediante la cual se decretó una medida de aseguramiento que conduce a la privación de la libertad de un individuo y dicha providencia resulta contraria al ordenamiento jurídico, el título de imputación a aplicar ha de ser el de error judicial y no el de privación injusta de la libertad. En ese sentido, el primero de los títulos de imputación está acompañado del rasgo de la especialidad respecto del segundo, en la medida en que el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 no efectúa distinción de tipo alguno respecto del tipo de providencia en la cual debe presentarse la contrariedad entre lo en ella decidido y las normas en las cuales debe fundarse, para efectos de concluir en la aplicabilidad del título de imputación de error jurisdiccional.

“Así pues, por resultar encuadrables las providencias que en contravía del ordenamiento jurídico decretan medidas de aseguramiento dentro de los procesos penales, en la descripción que efectúa el artículo 66 en mención del error jurisdiccional como ‘aquél cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley’, es dicho título de imputación el que debe aplicarse en los referidos supuestos y no el de privación injusta de la libertad, adicionalmente si se tiene en cuenta que este último, como es bien sabido, se describe en el artículo 68 del mismo conjunto normativo de un modo mucho más genérico e inespecífico”<sup>11</sup> (Se destaca).

<sup>11</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de mayo de 2014, expediente No. 23.783; Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, reiterada en sentencia del 29 de mayo de 2014 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente: 27.903; M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón (E), entre otras providencias.

(...)

Así las cosas, **lo que le correspondía a la Fiscalía General de la Nación era adelantar la actividad investigativa a fin de recaudar en debida forma las pruebas que permitieran esclarecer los hechos; empero, omitió proceder de conformidad y, en su lugar, valoró las grabaciones telefónicas aportadas por el Personero Distrital de Santa Marta, las cuales, como antes se precisó, además de haber sido obtenidas de manera ilícita, no relacionaban al demandante con los delitos por los que se le procesó.**

En este orden de ideas, **es claro que el ente acusador infringió sus deberes funcionales en el ejercicio de la acción penal, porque, se insiste, no examinó con el debido rigor las piezas procesales obrantes en el expediente, ni ordenó adicionales para establecer la relación del señor Flórez Pomares con la sustracción y cobro fraudulento de varios cheques provenientes de la cuenta bancaria de la Personería Distrital de Santa Marta, lo que hubiera impedido su detención preventiva.**

Las falencias mencionadas fueron advertidas al momento de resolverse sobre la legalidad de la medida de aseguramiento, oportunidad en la que de manera enfática se señaló que en la investigación penal se dio valor probatorio, pese a que carecían de este, a unas grabaciones telefónicas ilegales, lo que llevó a que se pasara por alto la inexistencia de elementos que dieran cuenta de la responsabilidad del señor Flórez Pomares.

En suma, **se encuentra probado que la detención preventiva del señor Luis Emigdio Flórez Pomares, dada la ausencia de elementos materiales probatorios que lo incriminaran, se presentó como consecuencia de un error jurisdiccional imputable a la providencia por medio de la cual la Fiscalía General de la Nación definió su situación jurídica y le impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva.**” (Resaltado es nuestro)

Así pues, concluyo este capítulo solicitando que, en virtud del principio *IURA NOVI CURIA*, sea el honorable Fallador quien, con la aplicación correcta del régimen de responsabilidad y la valoración probatoria proceda a determinar la responsabilidad administrativa y patrimonial, que lleve a la consecuente indemnización de los hoy demandantes.

## PRETENSIONES

1. Declarar administrativa y patrimonialmente responsables, de forma solidaria, a LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO, representadas por el Fiscal General de la Nación, el señor Néstor Humberto Martínez Neira y el Director de la Rama Judicial, respectivamente, o quienes hagan sus veces, por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor JONATHAN BARBOSA CASAS, durante el lapso comprendido entre el día 10 de abril de 2015 y el 15 de octubre de 2015, así como el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, sumada a las implicaciones que dicha privación le ha generado hasta el momento a toda la familia.

2. Como consecuencia de la anterior declaración se reconozca e indemnice lo siguiente:

### 2.1 PERJUICIOS MORALES.

Reconocer y pagar a favor de:

- JONATHAN BARBOSA CASAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.124.854.865, en calidad de VÍCTIMA DIRECTA, la suma de CIENTO CUARENTA (140) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.
- LILIANA MAGALID SANTAMARÍA BELTRÁN, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.116.240.729 en calidad de (COMPAÑERA PERMANENTE DE LA VÍCTIMA) la suma de CIENTO CUARENTA (140) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.
- JEISON SMITH BARBOSA SANTAMARÍA, identificado con NUIP No. 1.117.025.829 en calidad de (HIJO MENOR DE EDAD DE LA VÍCTIMA) la suma de CIENTO CUARENTA (140) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.
- MICHEL BARBOSA SANTAMARÍA, identificada con NUIP No. 1.116.078.173

en calidad de (HIJA MENOR DE EDAD DE LA VÍCTIMA) la suma de CIENTO CUARENTA (140) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

- ESPERANZA CASAS FLÓREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.790.210 en calidad de (MADRE DE LA VÍCTIMA) la suma de CIENTO CUARENTA (140) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.
- ANCÍZAR BARBOSA FLÓREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.564.528 en calidad de (PADRE DE LA VÍCTIMA), la suma de CIENTO CUARENTA (140) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.
- ISRAEL MUÑOZ CASAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.802.234 en calidad de (HERMANO DE LA VÍCTIMA), la suma de SETENTA (70) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

El salario mínimo aplicable será el fijado para la anualidad en la que quede en firme la sentencia que ponga fin al proceso.

## **2.2 DAÑO INMATERIAL POR AFECTACIÓN RELEVANTE A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS.**

A título de reparación integral solicito que las entidades demandadas:

1. Publiquen en diario de amplia circulación nacional, la sentencia condenatoria.
2. Pidan excusas públicas en el municipio de TULUÁ - VALLE por los hechos ocurridos.
3. Garanticen la atención médica y psicológica de forma permanente a JONATHAN BARBOSA CASAS y su familia.
4. Divulgar en las Fiscalías, Juzgados, Tribunales y Dependencias Judiciales, el contenido de la providencia condenatoria.

5. Implemente campañas al interior de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial que eviten este tipo de injusticias.

Con lo anterior se busca honrar la tragedia ocasionada a JONATHAN BARBOSA CASAS, brindar garantías de una vida íntegra y normal, generar un estado de reconciliación por parte de sus familiares; así como buscar medidas de no repetición con la población.

Teniendo en cuenta que las medidas solicitadas no son suficientes para reparar de forma íntegra el grupo familiar demandante, y en el entendido que existe la obligación de indemnizar los daños inmateriales por afectación relevante a bienes o derechos convencional y Constitucionalmente amparados de manera separada al constituirse en una nueva categoría de perjuicios, como se expone en el acápite de “FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIALES DE LOS PERJUICIOS MATERIALES E INMATERIALES”, solicito reconocer y pagar a favor de:

- JONATHAN BARBOSA CASAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.124.854.865, en calidad de VÍCTIMA DIRECTA, la suma de CIENTO CUARENTA (140) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.
- LILIANA MAGALID SANTAMARÍA BELTRÁN, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.116.240.729 en calidad de (COMPAÑERA PERMANENTE DE LA VÍCTIMA) la suma de CIENTO CUARENTA (140) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.
- JEISON SMITH BARBOSA SANTAMARÍA, identificado con NUIP No. 1.117.025.829 en calidad de (HIJO MENOR DE EDAD DE LA VÍCTIMA) la suma de CIENTO CUARENTA (140) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.
- MICHEL BARBOSA SANTAMARÍA, identificada con NUIP No. 1.116.078.173 en calidad de (HIJA MENOR DE EDAD DE LA VÍCTIMA) la suma de CIENTO CUARENTA (140) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

VIGENTES.

- ESPERANZA CASAS FLÓREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.790.210 en calidad de (MADRE DE LA VÍCTIMA) la suma de CIENTO CUARENTA (140) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.
- ANCÍZAR BARBOSA FLÓREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.564.528 en calidad de (PADRE DE LA VÍCTIMA), la suma de CIENTO CUARENTA (140) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

### 2.3. POR LESIÓN A LA HONRA, EL HONOR Y EL BUEN NOMBRE

- Reconocer y pagar, como daño autónomo e independiente, JONATHAN BARBOSA CASAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.124.854.865, en calidad de VÍCTIMA DIRECTA, la suma de CIENTO CUARENTA (140) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

### 2.4. POR LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

Reconocer y pagar, como daño autónomo e independiente, JONATHAN BARBOSA CASAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.124.854.865, en calidad de VÍCTIMA DIRECTA, la suma de CIENTO CUARENTA (140) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

### 2.6 POR DAÑOS A LA SALUD

Reconocer y pagar, como daño autónomo e independiente, a favor de:

- JONATHAN BARBOSA CASAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.124.854.865, en calidad de VÍCTIMA DIRECTA, la suma de CIENTO CUARENTA (140) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

- LILIANA MAGALID SANTAMARÍA BELTRÁN, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.116.240.729 en calidad de (COMPAÑERA PERMANENTE DE LA VÍCTIMA) la suma de CIENTO CUARENTA (140) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.
- JEISON SMITH BARBOSA SANTAMARÍA, identificado con NUIP No. 1.117.025.829 en calidad de (HIJO MENOR DE EDAD DE LA VÍCTIMA) la suma de CIENTO CUARENTA (140) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.
- MICHEL BARBOSA SANTAMARÍA, identificada con NUIP No. 1.116.078.173 en calidad de (HIJA MENOR DE EDAD DE LA VÍCTIMA) la suma de CIENTO CUARENTA (140) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.
- ESPERANZA CASAS FLÓREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.790.210 en calidad de (MADRE DE LA VÍCTIMA) la suma de CIENTO CUARENTA (140) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.
- ANCÍZAR BARBOSA FLÓREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.564.528 en calidad de (PADRE DE LA VÍCTIMA), la suma de CIENTO CUARENTA (140) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

## 2.7 PERJUICIOS MATERIALES

**LUCRO CESANTE:** Se solicita que se condene a las entidades demandadas a pagar indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor del señor JONATHAN BARBOSA CASAS (Víctima), la suma que se obtiene de calcular los salarios dejados de percibir de sus actividades como constructor, por el término que estuvo privado de la libertad, más el lapso que la persona

requiere para conseguir empleo luego de haber obtenido su libertad, equivalentes a **\$14.224.513,00** <sup>12</sup>.

**3. POR INTERESES:** Se cancelarán al demandante, o a quien o quienes sus derechos representaren al momento del fallo, los intereses que se generen a partir de la fecha de la sentencia o del auto aprobatorio de la conciliación judicial.

De conformidad con el art. 1653 del C.C. todo pago se imputará primero a intereses. En cuanto a los intereses se observarán las siguientes normas: el art. 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone “Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inc. 2 del art. 192 de este código o el de los cinco (05) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa comercial” (inc. 4 art. 195); y el art. 192 del mismo código que señala que las cantidades líquidas reconocidas en la sentencia o en el auto que apruebe conciliación “devengarán intereses moratorios” a partir de la ejecutoria de la sentencia o del auto (inc. 3 art. 192)

**4. CONDENA EN COSTAS.** Según el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo, condénese a los Entes públicos demandados, si resultaren vencidos en la presente litis, a cancelar las costas y agencias en derecho correspondientes en los términos del art. 361 del Código General del Proceso.

**5. CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA.** Los Entes públicos demandados, darán cumplimiento a la sentencia dentro de los diez (10) meses siguientes a la fecha de su ejecutoria, de conformidad con el inc. 2 del art. 192 del Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo, que determina: *“Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma*

---

<sup>12</sup> Dicho guarismo se obtiene al aplicar la fórmula pertinente aprobada por el H. Consejo de Estado, tal y como se expone en el capítulo “FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIALES DE LAS PRETENSIONES” en el acápite “PERJUICIOS MATERIALES – LUCRO CESANTE”

de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia”, quedando la parte demandante obligada a la presentación de la solicitud de pago correspondiente.

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIALES DE LOS PERJUICIOS MATERIALES E INMATERIALES

Téngase en cuenta lo dicho por la Corte Constitucional, en lo referente al precedente judicial, tal y como lo indica la sentencia T- 441 de 2003:

*“el desconocimiento del precedente, torna inconstitucional la decisión judicial, por cuanto desconoce los principios de igualdad y seguridad, aunque los jueces ordinarios gozan de un razonable margen de apreciación, cuya intensidad es mayor frente a los asuntos fácticos y decrece frente al propio precedente y termina en la sujeción al precedente de los órganos de cierre y al que, en materia constitucional, fije la Corte Constitucional”*

Se insiste en la aplicación del **PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL VIGENTE**, concediendo los máximos jurisprudenciales:

### ❖ PERJUICIOS MORALES

Solicito respetuosamente que se tenga en cuenta la sentencia de unificación **NO. 31170 DE 28-8-14. CONSEJO DE ESTADO**, en donde se estableció la forma en que se deben de tasar los perjuicios morales acorde a la intensidad de los mismos y el lazo afectivo y de consanguinidad, definiendo dicho perjuicio así:

*“2. PERJUICIO MORAL El concepto se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc. Que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo”*

**“2.4 REGLAS DE EXCEPCIÓN PARA TODOS LOS CASOS DE DAÑOS MORALES** En casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos, entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada en todos los eventos anteriores, **cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar el**

**triple de los montos indemnizatorios antes señalados.** Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño. (Subrayado propio)

Es evidente que la privación injusta de la libertad, causada al señor JONATHAN BARBOSA CASAS, es una violación a sus derechos fundamentales, ya que han truncado las esperanzas de una persona trabajadora, cumplidora de sus deberes con el hogar, muy alegre, activo físicamente y con muchos proyectos por delante, un hombre que traía alegría y motivación a su entorno familiar, inclusive sustento económico, lo cual se constituye en una mayor intensidad y gravedad del daño moral, aunado a la decepción de estar privado de la libertad por un delito que no había cometido; sufrimiento que también han llevado en hombros sus familiares, **por lo que al existir circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, resulta plenamente aplicable la regla de excepción contemplada en la providencia en cita.**

Debe tenerse en cuenta que en la sentencia de unificación se establece una indemnización de 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la víctima y cada uno de sus parientes dentro del primer grado de consanguinidad cuando la privación injusta de la libertad se configura por un lapso superior a 6 meses e inferior a 9 meses, pero en este caso en el que se presentó una GRAVÍSIMA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS QUE DEBE SER ENÉRGICAMENTE REPUDIADA POR LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, como lo es el hecho de haber privado de su libertad a un joven padre de familia, pilar del hogar por **185**

**días, ESTO ES 6 MESES 5 DÍAS,** debe accederse a otorgar una indemnización en favor del señor JONATHAN BARBOSA CASAS, como lo es la suma de **140 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la víctima directa y su núcleo familiar, dando aplicación a la regla de excepción contenida en la sentencia de unificación en referencia.**

Regla de excepción que debe ser aplicada para todo el grupo familiar aquí relacionado, pues es claro que la situación a la que fueron expuestos por el actuar omisivo de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, que causó en la humanidad de los accionantes un daño moral inmenso que resulta imposible de resarcir, pues como claramente se demostrará con el material probatorio, se trata de una familia demasiado unida, humilde, que ha padecido circunstancias de una mayor intensidad y gravedad derivadas de la privación injusta de la libertad del

señor JONATHAN BARBOSA CASAS, por lo que procede superar las sumas establecidas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014.

Es relevante en este acápite hacer mención al sufrimiento causado a los padres de mi representado, quienes dependían económicamente de JONATHAN, quien producto de su trabajo como ayudante de construcción velaba por sus progenitores para suministrarles lo necesario, toda vez que hacían parte de su núcleo familiar y convivían bajo el mismo techo, sus padres con los quebrantos de salud que padecen normalmente personas a su edad, tuvieron que sufrir dificultades nunca imaginadas, invadidos por sentimientos de desesperación, temor y zozobra que les generaba el hecho de no saber el futuro que le esperaba a su hijo al estar privado de la libertad injustamente, sin olvidar las noches de angustia por no tener que comer, sufriendo un sin número de necesidades junto a toda la familia, toda vez que fueron ellos quienes tuvieron que pasar a cumplir con las obligaciones de su hogar, circunstancias que en muchas ocasiones los obligaron a vivir de la caridad de sus amigos y vecinos; es importante señalar, que no podríamos escribir en letras el sufrimiento que afrontaron sus progenitores producto del actuar errado del Ente investigador y del Juez de Control de Garantías, situaciones que nunca olvidaran y dejaron en su vida emocional, y sentimental una huella indeleble, además de ser tildados por los vecinos de tener un hijo narcotraficante, sin serlo.

Es relevante en este acápite hacer mención al sufrimiento causado a sus hijos, pues todos los que son menores de edad en un grupo familiar, no entienden lo que tiene que ver con esta clase de delitos, por esta razón no les cabía en su cabeza, el pensar que su padre estuviera privado de la libertad, que no pudieran compartir con ellos, que su libre movilidad se viera afectada en un establecimiento carcelario; pasando por muchos momentos de angustia, de dolor, y teniendo que sufrir necesidades porque el señor JONATHAN BARBOSA CASAS no podía brindarles un apoyo económico y emocional; tener que pasar por todos estos problemas a raíz de una mala investigación, ha sido muy tormentoso para la esfera intrínseca y emocional de sus vidas, ya que estos menores fueron privados de valiosos momentos junto a su progenitor, y aun compelidos sin justificación, a tener un desmejoramiento en su calidad de vida, pues su padre era quien les brindaba su sustento y manutención, lo que les produjo carencias para un óptimo crecimiento y desarrollo, y por ende incalculables perjuicios a nivel físico, intelectual, social y emocional.

Así mismo, la compañera permanente de JONATHAN BARBOSA CASAS tuvo que padecer situaciones de gran tristeza, puesto que el padre de sus hijos, se encontraba privado de su libertad padeciendo los vejámenes comúnmente conocidos en los centros carcelarios del país para ingresar a visitarlo. Saber que JONATHAN no podría compartir con sus hijos y suministrarles lo necesario para su subsistencia, le causó desasosiego en demasía, como consecuencia del error infundado de las Entidades estatales, las cuales no cumplieron con su deber de llevar a cabo una investigación prolija y ceñida a la norma, procurando salvaguardar las garantías fundamentales de todo ciudadano, por el contrario, produjeron un daño inmenso a la humanidad de esta demandante.

Para el hermano de JONATHAN BARBOSA CASAS, la situación no fue diferente, puesto que no encontraba explicación a lo sucedido con su hermano, quien siempre ha sido un apoyo para sus padres y para él, ya que con su humilde oficio de ayudante de construcción y su noble corazón le alcanzaba para estar pendiente de su hermano ocasionalmente, pero lo más importante era la unidad y el apoyo incondicional que existía entre ellos. Cómo no iba a sufrir su hermano al ver las necesidades por las que pasaban sus sobrinos y sus padres, mientras la justicia colombiana arrancaba del seno de su hogar a una persona inocente, allí es donde el ser humano en condiciones extremas es obligado por la naturaleza a sacar fuerzas para afrontar las injusticias de la vida, y eso precisamente fue lo que padeció el hermano de mi hoy prohijado.

El sufrimiento padecido por todo el grupo familiar del señor JONATHAN BARBOSA CASAS fue inmenso, pues no sólo tenían a su familiar privado de la libertad, sino que debieron ser los pilares de los menores de edad de la familia, tuvieron que estar pendientes de todo lo que necesitaran, aunado a que en las fechas especiales el dolor era mayor, como lo son los días de cumpleaños, día de la madre, del padre, pues son épocas de amor, felicidad, tranquilidad, regocijo y alegría, sin embargo para esta familia fueron momentos y sentimientos que no pudieron disfrutar, toda vez que JONATHAN estaba privado de la libertad injustamente, y que por el contrario las épocas especiales se convirtieron en tiempos de aflicción y desconsuelo al saber que su ser querido estaba ausente; la congoja era aún más grande con la incertidumbre de que pasaban los meses y la Fiscalía no caía en

cuenta de su error, al ser evidente el yerro de iniciar una investigación en contra de este ciudadano inocente.

Ni todo el oro del mundo le puede devolver al señor JONATHAN BARBOSA CASAS el tiempo que estuvo privado de la libertad, tratando de demostrar su inocencia, ni mucho menos a su grupo familiar, a su compañera permanente, sus hijos, sus padres y su hermano, no hay dinero que compense el daño al que fue expuesto por parte del Estado, y que ahora éste le debe indemnizar a través de la sentencia condenatoria correspondiente, en la que se debe hacer especial énfasis en la falla administrativa en que incurrió, primero al privar de la libertad a este individuo, pero la que constituye la peor FALENCIA, en permanecer en dicho error durante estos meses, cuando los elementos materiales de prueba eran lo suficientemente indicativos de que se estaba cometiendo una injusticia con este ciudadano.

❖ **DAÑO INMATERIAL POR AFECTACIÓN RELEVANTE A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS.**

Aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática, no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce –sin discriminación alguna- la primacía de los derechos inalienables de la persona (**artículo 5 C.P.**) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad como ámbito de autodeterminación de los individuos (**artículo 2 C.P.**), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia “*in dubio pro reo*” (**artículo 29 eiusdem**).

Con la trágica situación a la que fue expuesto el señor JONATHAN BARBOSA CASAS por cuenta de las instituciones demandadas, estamos ante la clara violación de derechos de rango Constitucional como son:

- **El derecho fundamental a la igualdad** (Art. 12 de la C.P.).
- **El derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y al buen nombre**. (Art. 15 de la C.P.).

- **El derecho fundamental a la honra.** (Art. 21 de la C.P.)
- **El derecho fundamental a la paz** (Art. 22 de la C.P.).
- **El derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.** (Art. 24 de la C.P.).
- **El derecho a la libertad**, al respecto resulta pertinente citar textualmente lo plasmado en nuestra Carta Política, así:

**“ARTICULO 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.**

*La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.*

*En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.”*

- **El derecho al debido proceso.** (Art. 29 de la C.P.)

Escenario que causa el respectivo perjuicio y que evidentemente debe ser reparado.

Medidas de justicia restaurativa que se encuentran plenamente fundamentadas en la mencionada sentencia de unificación de Sala Plena del 28 de agosto de 2014, en la cual se sostuvo que esta clase de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados deben ser reconocidos como una **tercera categoría de daños inmateriales autónomos**. En esa oportunidad se precisó:

*“El daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las siguientes características: i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial. // ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales. // iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente Reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular. // iv) La*

*vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.*

*La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos:*

*i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial. // ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia. // iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas "de crianza", en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. // iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado. // v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobando las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional. // vi) Es un daño frente al cual se confirme el rol del juez de responsabilidad extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas.*

*En aras de evitar una doble reparación, el juez deberá verificar ex ante: (a) que se trate de una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho constitucional o convencional; (b) que sea antijurídica; (c) que en caso de ordenarse una indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios materiales e inmateriales ya reconocidos, y (d) que las medidas de reparación sean correlativas oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado* (Resaltado fuera de texto)

En consecuencia, de lo expuesto hasta el momento queda en evidencia la clara vulneración de los derechos de rango Constitucional, y como existe la obligación de indemnizar los mismos de manera separada al constituirse en una nueva categoría de perjuicios, aclarando que tal como lo señaló el H. Consejo de Estado en reciente sentencia de 5 DE MARZO DE 2015, SECCIÓN TERCERA, RAD:05001233100020040361701 (37310 Consejero Ponente Ramiro Pazos), **“los 100 SMLMV NO SON SOLO PARA LA VÍCTIMA DIRECTA SINO PARA SU NÚCLEO FAMILIAR”**.

#### ❖ **POR LESIÓN A LA HONRA, EL HONOR Y EL BUEN NOMBRE**

El Consejo de Estado ha aceptado la procedencia de perjuicios por lesión a la honra, el honor, la libertad y el buen nombre en casos de sindicación y/o detención ilegal a una persona por supuestos nexos con diversos delitos, haciendo pública esa relación y ocasionando daño moral y daño a la reputación familiar, estabilidad familiar, tranquilidad y vida. Igualmente, también se ha reconocido la procedencia de los anteriores perjuicios, junto con aquellos originados por violación a la dignidad, vida e intimidad familiar en un caso en el cual se privó injustamente de la libertad a un padre por haber sido acusado y privado de su libertad injustamente por una supuesta violación y muerte de su hija menor.<sup>13</sup>

En relación con la indemnización de estos bienes, inicialmente hay que tener en cuenta la distinción que la jurisprudencia ha delineado entre dichos conceptos. Así, la Corte Constitucional ha señalado que:

*“El buen nombre ha sido entendido por la jurisprudencia y por la doctrina como la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones*

<sup>13</sup> RUEDA PRADA, Diana, LA INDEMNIZACIÓN DE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Grupo Editorial IBAÑEZ, enero de 2016, p 214.

*ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas. Este derecho de la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social". (...)*

*"La honra es] la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan. (...) Al referirse al núcleo del derecho a la honra, la Corte en Sentencia señaló que del mismo hace parte tanto, la estimación que cada individuo hace de sí mismo, como, desde una perspectiva externa, el reconocimiento que los demás hacen de la dignidad de cada persona, y expresó que para que pueda tenerse como afectado el derecho a la honra, esos dos factores debe apreciarse de manera conjunta."<sup>14</sup> (Subrayado ajeno al original).*

Igualmente,

*"El honor se refiere a la conciencia del propio valor, independiente de la opinión ajena; en cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno -el sentimiento interno del honor-, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros -honra"<sup>15</sup> (Subrayado ajeno al original).*

Al romper, puede apreciarse la exhortación que se hace por parte del Tribunal Constitucional para que las autoridades de la República, incluidos por supuesto los Jueces, brinden garantías materiales frente al valor fundamental de la honra y el buen nombre y propicien los mecanismos de protección, y, cómo no, los de justa retribución cuando han sido conculcados, labor que le compete al derecho de daños.<sup>16</sup>

En relación con la honra y el buen nombre, señala CESAR SAAVEDRA MADRID, que la reparación de aquéllos encuentra sustento en el artículo 15 C.P. y en el *ius imaginis*, que no se refiere exclusivamente a la integridad física, sino que se hace extensivo a la integridad moral de la persona<sup>17</sup>.

Aunque el reconocimiento de este daño en la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es un aspecto novedoso en la jurisprudencia del Consejo de Estado, ya que, en otras oportunidades la Sección Tercera se había referido a la **lesión al derecho a la honra como fundamento para una indemnización autónoma**, pero por la vía del daño a la vida de relación e igualmente por vía del daño moral, lo que sí resulta novedoso y que por lo tanto solicito se acate en el caso

<sup>14</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-489 de 2002, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.

<sup>15</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-063 de 1994, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.

<sup>16</sup> PINZÓN MUÑOZ, Carlos Enrique, *El derecho de daños en la responsabilidad Extracontractual del Estado*. P. 222.

<sup>17</sup> SAAVEDRA MADRID, Cesar Augusto, Ob Cit. P. 133. Sobre un estudio histórico y psicológico del honor y la imagen, ver páginas 135-141.

particular y concreto del señor JONATHAN BARBOSA CASAS es que este perjuicio se reconozca como **AUTÓNOMO**, independiente del daño moral y de la alteración a las condiciones de existencia, como en efecto lo hizo el H. Consejo de Estado en sentencia del 29 de enero de 2014<sup>18</sup>, en la que se decidió acerca de la privación injusta de la libertad de los implicados con el asesinato del ex candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento.

En la providencia mencionada, el Consejo de Estado reconoce a tres personas (Alfredo, Héctor y Norberto) acusadas y privadas de la libertad por 42 meses por haber asesinado supuestamente al ex candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, su escolta y un concejal, lo siguiente<sup>19</sup>:

✓ “Los perjuicios morales de Alfredo por no haber sido incluido en el acuerdo conciliatorio. Para ello analiza la vulneración a la libertad, la honra y el buen nombre dentro del capítulo de los perjuicios morales; posteriormente se refiere a la facultad de superar el tope de los 100 SMMLV y, finalmente, señala:

“... **comportó una grave afectación de sus derechos a la dignidad, al buen nombre y a su honra, circunstancias que permiten inferir, para el caso concreto, una mayor afectación moral.**

Con fundamento en todo lo anterior y teniendo en cuenta que en el presente asunto **se configuraron dos daños antijurídicos independientes, a saber: i) privación injusta de la libertad y; ii) falsas imputaciones difundidas masivamente, la Sala decretará una indemnización por cada uno de tales hechos dañosos**”. (Resaltado ajeno al original).

En otras palabras, si bien se afirma que se reconocerán los perjuicios morales a Alfredo, por no haber sido incluido en el acuerdo conciliatorio, finalmente **se le reconocen dos daños antijurídicos “independientes” que se liquidan por aparte, otorgándole así 300 SMMLV por “privación injusta de la libertad” a Alfredo, monto que no les fue reconocido en cambio a las otras dos víctimas y 200 SMMLV por afectación al buen nombre.**

- ✓ Se reconocen **200 SMMLV a cada una de las víctimas por afectación al buen nombre.** Recuérdese que en el acuerdo conciliatorio se habían reconocido ya 60 SMMLV a Héctor y Norberto.

<sup>18</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 29 de enero de 2014, Exp.: 33.806, C.P. Hernán Andrade Rincón.

<sup>19</sup> En el presente caso hay que tener en cuenta que Héctor y Norberto habían realizado un acuerdo conciliatorio con la Fiscalía General de la Nación, a partir del cual se reconocieron 60 SMMLV a cada uno por concepto de perjuicios morales. En consecuencia, el Consejo de Estado respeta lo conciliado y, en relación con los perjuicio

- Se reconocen 200 SMMLV a cada una de las víctimas por “alteración grave a las condiciones de existencia”.

En conclusión, analizando sólo los perjuicios extrapatrimoniales, Norberto y Héctor recibieron (i) 60 SMMLV por perjuicios morales, (ii) 200 SMMLV por falsas imputaciones y (iii) 200 SMMLV por alteración grave a las condiciones de existencia. Por su parte, Alfredo recibió (i) 300 SMMLV por privación injusta de la libertad, (ii) 200 SMMLV por falsas imputaciones y (iii) 200 SMMLV por alteración grave a las condiciones de existencia.

#### ❖ POR LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

Como se ha podido analizar, a partir de la privación injusta de la libertad, pueden surgir diferentes daños dependiendo de la esfera extrapatrimonial que se perjudique: familia, honor y buen nombre, intimidad, dignidad, tranquilidad, etc. Sobre la indemnización de estos últimos años se han analizado los criterios al interior del Consejo de Estado, por lo que **se considera que la libertad, como bien Constitucional y convencionalmente protegido, es susceptible de indemnización autónoma.**

Como se indicó en precedencia, el H. Consejo de Estado protegió la libertad por separado en el caso de la privación injusta de la libertad por el asesinato de Luis Carlos Galán, su escolta y un concejal. **ENRIQUE GIL BOTERO señala que la indemnización por afectación a la libertad debe ser resarcida de manera autónoma e independiente<sup>20</sup>.**

Sobre lo anterior, es claro que, en un contexto de simple lógica, no habría razón alguna evidente para rechazar la indemnización por afectación a la libertad de manera independiente.

Así como sucede en el derecho a la salud, que es reconocido individualmente y su afectación es protegida mediante una indemnización independiente de los demás rubros, de igual manera tendría que poderse aplicar para el derecho a la libertad. La indemnización autónoma e independiente de los bienes y derechos

<sup>20</sup> Gil Botero, Enrique. *La constitucionalización del derecho de daños*, P.80.

constitucionales planteada por el H. Consejo de Estado, permite darle claridad y orden al tema.

Por último, vale la pena resaltar que la indemnización es una forma de reparar el daño que resulta procedente cuando no es posible la reparación in natura o restablecimiento del daño - como se explicó al principio-, de manera que no se entiende por qué deben “privilegiarse” las medidas reparatorias no indemnizatorias, por encima de la indemnización siendo que lo más probable es que, al momento de proferirse la sentencia hayan pasado muchos años, tornando inocua muchas de dichas medidas. Con lo anterior no quiere restarse valor a dichas medidas; todo lo contrario, ellas serán necesarias precisamente en muchos casos en los cuales el daño antijurídico tenga una intensidad mayor y/o pueda ser reparado de manera oportuna mediante la adopción de dichas medidas.<sup>21</sup>

Sin embargo, la crítica está dirigida a que no se tenga la indemnización como una medida reparatoria excepcional, pues ello podría llevar a su inaplicación frente a esa tercera categoría de perjuicios extrapatrimoniales.<sup>22</sup>

#### ❖ **POR DAÑOS A LA SALUD**

Se solicita este perjuicio en razón a las graves afectaciones psicológicas de las que fue objeto con ocasión de la privación injusta de la libertad, lo anterior en consideración al daño que se generó en su esfera intrínseca de su salud mental, pues es innegable la situación a la que se tiene que someter cuando se es privado de la libertad, a cambiar sus hábitos, su vida, su forma de pensar, al no poder salir a distraerse, a trabajar, a compartir con el resto de su familia y amigos, sumada la incuestionable situación carcelaria en el país, comenzando por el tema del hacinamiento, violaciones a derechos fundamentales al interior del penal, humillaciones y vejámenes a los que son sometidos los internos, aspectos que crean un perjuicio psicológico en el ser humano que, debe ser resarcido de forma independiente y autónoma, como claramente lo ha precisado el H. Consejo de Estado en la plurimencionada sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014.

<sup>21</sup> RUEDA PRADA, Diana, LA INDEMNIZACIÓN DE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Grupo Editorial IBAÑEZ, enero de 2016, p 226.

<sup>22</sup> Ibidem.

Para el análisis de este perjuicio corresponde hacer una valoración de cómo las personas que reclaman el mismo, efectivamente han visto afectadas sus vidas y la forma común y corriente en que éstas eran desarrolladas y como la relación con el entorno y personas, han cambiado debido al daño causado por la parte demandada.

Debe hacerse especial hincapié en la situación particular que se presenta en tratándose de personas acusadas de delitos tan graves como lo es FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS O EXPLOSIVOS Y TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES, de los cuales fue acusado el señor JONATHAN BARBOSA CASAS. Después de la privación injusta de la libertad, es imposible recuperar el tiempo que perdió en la cárcel, fueron **185 días, ESTO ES 6 MESES**

**5 DÍAS**, en los que se perdió de momentos muy importantes junto a sus seres queridos por estar injustamente en cautiverio, este daño no solo se ve reflejado en tiempo, sino también en todos los aspectos de los cuales está integrado el ser humano, como por ejemplo el daño que éste generó en su personalidad, autoestima, en su forma de interactuar con los vecinos, el no saber cómo explicarle a su grupo familiar por los meses que no podía salir y más por un delito que no cometió, debiendo ser sometido al escarnio público, tildándolo de delincuente.

El señor JONATHAN BARBOSA CASAS, perdió varios de sus derechos como ciudadano colombiano, como lo es el de tener un trabajo digno, la privación del voto, además manifiesta que sus condiciones de salud no fueron las mejores, su vida dio un giro de 180 grados, estos meses de privación de la libertad causaron un mayor grado de intranquilidad, máxime cuando él tenía la certeza de que era inocente.

Para sus padres, sus hijos y compañera permanente el calvario no fue muy alejado del sufrido por mi representado, pues aunado al dolor de ver a su familiar privado de su libertad, se sumaba el tener que incurrir en gastos para sobrellevar la vida diaria sin un ingreso, adquiriendo deudas y de lo poco que los mismos familiares les pudieran colaborar; el tener que pasar necesidades, hambre, y sin tener un apoyo de quien llevaba las riendas del hogar, de quien hacía hasta lo imposible para proveerles bienestar.

En concordancia con la posición asumida por el Consejo de Estado a través de la más reciente jurisprudencia, es bajo este perjuicio de daño a la salud que deben ser indemnizados los que anteriormente se denominaban “Daños a la vida de relación”, en este orden se solicita la indemnización correspondiente tanto para la víctima como para su grupo familiar en primer grado de consanguinidad, pues para nadie es un secreto, y se probará dentro del proceso, que la privación de la libertad de un miembro de familia, indudablemente cambia la forma en que estas personas interactúan con la comunidad, con sus vecinos y hasta con los demás familiares.

### **PERJUICIOS MATERIALES**

Se encuentra debidamente probado en el dossier que el señor JONATHAN BARBOSA CASAS, se desempeñaba como auxiliar de construcción, el cual laboraba para las siguientes empresas y personas naturales, incluso hasta el momento de presentarse la privación injusta de la libertad:

- OBRA CIVIL COLOMBIA S.A.S. NIT 900.672.742-4
- CONSTRUCCIONES NÉSTOR
- HERNANDO REYES BALDERRAMA
- LUIS ERNESTO QUIROZ HERNÁNDEZ

(VER PRUEBA 3 – EXPEDIENTE PENAL - CONSTANCIAS LABORALES FOLIOS 80 A 83)

Sin embargo, tales certificaciones no permiten inferir el valor exacto que percibía el señor BARBOSA CASAS por los servicios prestados, por lo que no hay manera de determinar el monto de sus ingresos.

No obstante, en aplicación de la jurisprudencia del H. Consejo de Estado se presume que el ejercicio de una actividad productiva reporta al menos, un salario mínimo mensual legal vigente.

Así lo ha dicho el órgano de cierre de la Jurisdicción Contenciosa:

*“Conviene destacar que, si bien dentro del asunto de la referencia no se logró acreditar que el señor Caicedo Hurtado desempeñara al momento de su detención actividad productiva alguna, toda vez que dentro del acervo probatorio solo obra un informe de la Personería de Samaniego en el cual se indica que la víctima se dedicaba a vender calzado y cigarrillos, lo cierto es que una de las funciones de la pena (artículo 4° de*

la Ley 599 de 2000<sup>23</sup>) es la resocialización del individuo<sup>24</sup>, lo cual implica la reincorporación del individuo a la sociedad económicamente productiva, cuestión que resulta compatible con el principio constitucional de la buena fe, principio fundamental previsto en el artículo 83 de la Constitución Política<sup>25</sup>.

*"En consecuencia y teniendo en cuenta que el señor Caicedo Hurtado para la fecha en que hubiere quedado en libertad tendría 26 años de edad, la Sala **aplicará la presunción respecto de que toda persona que se encuentre en determinada edad productiva devenga por lo menos el salario mínimo legal vigente.***

*"Proceder en forma contraria en el presente asunto entrañaría el desconocimiento de los valores, principios y fines que tanto la Constitución Política como las normas penales consagran respecto de la reinserción social del individuo y el principio de buena fe"<sup>26</sup> (Se destaca).*

Así las cosas, el lucro cesante a favor del señor JONATHAN BARBOSA CASAS, se solicita sea liquidado con base en el período de tiempo que estuvo privado de la libertad, más el lapso que la persona requiere para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad. Sobre el tema ha sostenido el H. Consejo de Estado:

*"En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (**8.75 meses**)<sup>27</sup>"<sup>28</sup> (Negrilla fuera de texto).*

En estos términos, procede a calcularse el monto de la indemnización:

Período de privación de la libertad 6.16 meses.

Período a indemnizar: 6.16 + 8.75 = **14.91 meses.**

Se tomará como el ingreso base de liquidación el salario mínimo vigente actualmente (\$737.717), en tanto resulta más favorable que actualizar el que regía en la época de los hechos. Adicionalmente, al mismo se agregará un 25% por concepto de prestaciones sociales, lo cual arroja la suma de **\$ 922.146,25.**

<sup>23</sup> Artículo 4 de la Ley 599 de 2000: Funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión.

<sup>24</sup> Corte Constitucional. Sentencia C – 1112 de 24 de agosto de 2000: "La pena tiene en nuestro ordenamiento jurídico un fin preventivo, que se cumple en el momento en que el órgano legislativo establece la sanción que se presenta como la amenaza de un mal ante la violación de las prohibiciones-; un fin retributivo, que se manifiesta al momento de la imposición judicial de la pena, y un fin resocializador que orienta la ejecución de la misma, de conformidad con los principios humanísticos y las normas de derecho internacional adoptadas. Privar al contraventor de la posibilidad de acumular las rebajas de pena que como se señaló, por lo general guardan relación con el desarrollo de actividades edificantes para el interno como el trabajo o el estudio - se traduce en una forma de limitar sus posibilidades de pronta reinserción a la sociedad, coartando tanto el desarrollo de su personalidad que también en estos casos se reconoce plenamente al individuo- como las posibilidades de que el sistema judicial y penitenciario se convierta en verdadera herramienta de control y transformación social".

<sup>25</sup> Artículo 83 de la Constitución Política de 1991: Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten.

<sup>26</sup> Sentencia de 11 de abril de 2012 expediente No. 23.901 y sentencia de 23 de mayo de 2012 expediente No. 24.861.

<sup>27</sup> "Cfr. URIBE G., José Ignacio y GÓMEZ R., Lina Maritza, «Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003», en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, N° 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22".

<sup>28</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente No. 13.168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Se hace necesario aplicar la fórmula para el cálculo del lucro cesante consolidado:

$$S = Ra \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

I

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante consolidado para el señor JONATHAN BARBOSA CASAS: **\$ 922.146,25.**

i= Interés puro o técnico: 0,004867

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización 14.91 meses

Reemplazando tenemos:

$$S = \$ 922.146,25 \frac{(1+ 0,004867)^{14.91} - 1}{0,004867}$$

$$S = \$14.224.513,00$$

Para efectos de esta demanda se estima como lucro cesante la suma de **\$14.224.513,00**

## MEDIO DE CONTROL

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, en contra de: **LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**

## PRUEBAS

**PRUEBAS QUE SE APORTAN:**

### DOCUMENTALES

Se aportan en medio magnético y físico:

- Registros civiles de:

- ✓ **JONATHAN BARBOSA CASAS**
- ✓ **JEISON SMITH BARBOSA SANTAMARÍA**

- ✓ MICHEL BARBOSA SANTAMARÍA
- ✓ ISRAEL MUÑOZ CASAS
- ✓ (PRUEBA 1).

- DECLARACIÓN EXTRAJUICIO (PRUEBA 1A)
- EXPEDIENTE INPEC (PRUEBA 2).
- EXPEDIENTE PENAL (PRUEBA 3)
- AUDIENCIA DE PRECLUSIÓN (PRUEBA 4)
- CONSTANCIA DE RECIBIDO DERECHO DE PETICIÓN (PRUEBA 5).

#### **PRUEBAS QUE SE SOLICITAN:**

#### **DOCUMENTALES:**

Señor Juez para la fecha de la presentación de esta demanda, no se ha obtenido respuesta completa del derecho de petición instaurado ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Buga, Valle, donde se solicitó copia simple de todo el expediente a nombre de **JONATHAN BARBOSA CASAS** y copia de los audios y/o videos de las audiencias celebradas en el proceso penal anteriormente descrito, ya que la respuesta dada por el Juzgado Primero Municipal con Funciones de Conocimiento fue **incompleta**, toda vez que se **omitió** el envío de los **audios y/o videos de las audiencias preliminares** (legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento). (VER PRUEBA 5)

Dado lo anterior, solicito comedidamente su Señoría se oficie al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Buga, Valle, para que remita con destino al presente proceso **copia de los audios y/o videos de las audiencias preliminares** (legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento), a fin de precisar los detalles correspondientes de dichas diligencias.

Petición que se realiza tomando en consideración la siguiente pauta doctrinal, contenida en el texto *“La prueba de la responsabilidad extracontractual del estado”*, del tratadista Pinzón Muñoz Carlos Enrique, Edición publicada en junio de 2015,<sup>29</sup> que a la letra indica:

*“Con la expedición de ley 906 de 2004 (código de procedimiento penal) solo pueden servir de prueba los documentos que contienen la información presentada y sustentada en AUDIENCIA, de lo que se deriva sin ninguna excepción, que los emanados de la carpeta, son un simple referente de la actuación, es decir, no son técnicamente prueba de las actuaciones surtidas en este tipo de procesos.*

*En efecto, la dirección que usualmente otorgan las partes a las controversias de este tipo es equivocada, en la medida en que se continua solicitando la copia de los documentos escritos que reposan en las carpetas penales o allegándolos en forma de anexos, **sin percatarse que dada la oralidad que se incorporó con la expedición de la ley 906 de 2004 al procedimiento penal, la prueba de la detención y de la privación injusta de la libertad reposa en los registros magnéticos de las audiencias preliminares y ordinarias surtidas dentro de ese tipo de causas.***

*“Artículo 297. Para la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez de control de garantías con las formalidades legales”  
(...)*

*Capturada la persona será puesta a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido.*

*En ese mismo sentido, la formulación de la imputación, según la disposición contenida en el artículo 286 del mismo estatuto, se surte en **“audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías”***

*Y para rematar, la medida de aseguramiento se solicita ante un **“juez de control garantías”**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 306 de la ley 906 de 2004, quien en ultimas, de cumplirse con los requisitos consagrados por esa misma sistemática (artículo 308 ejusdem), es quien dispone de su procedencia dentro de una decisión **motivada que se dicta en audiencia.***

*Entratándose de la acreditación de la **detención** de una persona, y con más veras si se alega que es **injusta**, la acreditación del hecho mismo de la privación de la libertad, el que dentro del nuevo sistema penal acusatorio, solo se detecta a través **de las audiencias surtidas ante el***

<sup>29</sup> Páginas 168-170

**juez de control de garantías, y ulteriormente por el juez de conocimiento, quien se encarga de las audiencias de preparatoria y de juicio oral, así como las que determinen la suerte del proceso penal, como, verbigracias, la preclusión de la investigación.**

No puede seguirse considerando que la copia autentica del proceso penal, es prueba idónea de la restricción de la libertad de una persona, pues al tenor de lo dispuesto dentro de esa sistemática, puntualmente en el artículo 146 de la ley 906 de 2004, que define el **registro de la actuación**, está **prohibida** cualquier reproducción escrita del proceso penal, ya que para ellos se ha dispuesto de los medios idóneos de registro y reproducción, los que dada la oralidad en que se basa el sistema, no son más que los medios magnéticos que contienen el desarrollo de cada audiencia procesal, eso sí garantizando su originalidad y autenticidad.

Precisamente por ello el artículo 163 de la misma ley dispone que, **“En desarrollo de los principios de oralidad y celeridad las providencias judiciales en ningún caso se podrá transcribir, reproducir o verter a texto escrito apartes de la actuación, excepto las citas o referencias apropiadas para la debida fundamentación de la decisión.”**

De cara a lo anterior, necesariamente debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 165 de la ley 906 de 2004. **“Las providencias judiciales solo serán reproducidas a efectos del trámite de los recursos. Podrán expedirse certificaciones por parte de la secretaría correspondiente donde conste un resumen de lo decidido, previa petición de quien acredite un interés para ello.**

En suma, es una verdad incuestionable la que determina que, en el proceso penal adelantado bajo el ritmo de la ley 906 de 2004, **LA PRUEBA DE LAS DECISIONES QUE SE ADOPTAN ORALMENTE, SON LOS REGISTROS FIDEDIGNOS Y AUTÉNTICOS, NO LAS ACTAS QUE SE EXTIENDEN AL FINAL DE LA ACTUACIÓN COMO UN RESUMEN DE LO OCURRIDO.”** (Resaltado fuera del texto original)

## TESTIMONIALES

Respetuosamente se solicita se decrete como prueba el testimonio de los señores:

- MARÍA OFIR VARÓN, identificada con cedula de ciudadanía No. 29.874.584,

quien puede ser ubicada en la dirección: Calle 19 No. 1 - 41 Barrio El Limonar de Tuluá, Valle. Teléfono: 3104362922.

- JONATHAN ANDRÉS LENIS HINCAPIÉ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.116.249.205, quien puede ser ubicado en la dirección: Manzana F lote 7 parcela 1, Urbanización San Francisco, de Tuluá, Valle.

Para que rindan declaración en audiencia, de todo aquello que les conste frente a la situación del señor JONATHAN BARBOSA CASAS y den respuesta a las preguntas que se formularán en su momento frente a los siguientes temas:

- a. Indicarán si conocieron al señor JONATHAN BARBOSA CASAS y desde cuanto tiempo atrás.
- b. Cómo estaba conformada su familia para el momento de su privación injusta de la libertad y en la actualidad.
- c. Dónde y con quien vivía el señor JONATHAN BARBOSA CASAS, para el momento de su privación y en la actualidad.
- d. Cómo eran las relaciones con su grupo familiar antes y después de su privación injusta de la libertad.
- e. Qué efecto produjo en su grupo familiar esta privación.
- f. Indicarán que originó en sus familiares y en la propia víctima su privación de la libertad.
- g. Se les interrogará por todos los daños y perjuicios por los cuales se solicita indemnización (daño a la salud, daño a la honra y al buen nombre, a la vida de relación, etc.)
- h. Indicarán todo cuanto les conste respecto de la situación laboral de la víctima directa, antes y después de su privación injusta de la libertad.

Las citaciones para la comparecencia de todas y cada una de las personas mencionadas serán entregadas en el lugar de domicilio de éstos por el suscrito apoderado judicial.

## ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

Se estima la cuantía en **\$14.224.513,00** como pretensión por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, sin que se limite la misma, tal como lo expone el art. 157 de la Ley 1437 de 2011.

## JURAMENTO ESTIMATORIO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 206 del Código General de Proceso (Ley 1564 de 2012), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entenderá realizado solemnemente con la presentación de este escrito, que el monto de la suma por perjuicios materiales reclamados por los demandantes asciende a la suma de **\$14.224.513,00**.

## CADUCIDAD

Respecto a la caducidad de la acción de reparación directa en tratándose de casos de privación injusta de la libertad, la posición del Honorable Consejo de Estado ha sido clara y reiterativa al determinar que, ésta se cuenta a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en quede en libertad el procesado, **LO ÚLTIMO QUE OCURRA**<sup>30</sup>. Momento en el cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.

En el presente caso la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor **JONATHAN BARBOSA CASAS** se presentó desde el día 10 de abril de 2015 hasta el 15 de octubre de 2015; teniendo en cuenta que la audiencia de preclusión quedó ejecutoriada el 14 de octubre de 2015, y la libertad del procesado se materializó el día **15 de octubre de 2015**, tal y como consta en el certificado de libertad anexo (PRUEBA 2 – EXPEDIENTE INPEC), los 2 años de caducidad para ejercer la acción de reparación directa fenecerían el **16 de octubre de 2017**, dado que la libertad del señor BARBOSA fue lo último que ocurrió, y teniendo en cuenta que la solicitud

<sup>30</sup> Sentencia del 8 de febrero de 2017 M.P. Hernán Andrade Rincón (Exp.41204), Sentencias del 25 de enero de 2017 M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera (Exp.44214-42665-43699), Sentencias del 8 de noviembre de 2016 M.P. Marta Nubia Velásquez Rico (EXP.44955-44087-44524-38144), Sentencia del 7 de diciembre de 2016 M.P. Marta Nubia Velásquez Rico (Exp.44751) Sentencia del 11 de agosto de 2011 M.P. Hernán Andrade Rincón (Exp.21801).

de conciliación fue presentada el día **6 de octubre de 2017**, el término de caducidad se suspendió conforme a lo manifestado por el artículo 21 de la ley 640 de 2001, estando en término para presentar la respectiva demanda.

## COMPETENCIA

En los términos del artículo 156 numeral 6 de la Ley 1437 de 2011, como elección del accionante solicito se tenga el lugar donde se produjeron los hechos, es decir el Municipio de Tuluá - Valle, así mismo que la cuantía no excede de los 500 SMLMV, por lo que corresponde al señor Juez Administrativo del Circuito de Buga-Valle (REPARTO) conocer del presente asunto.

## NOTIFICACIONES

Las Entidades demandadas

**LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:** Cl. 10 No. 5-77 Cali, Valle del Cauca, teléfono: 57(2) 3927900

Email: [juridicanotificacionesutela@fiscalia.gov.co](mailto:juridicanotificacionesutela@fiscalia.gov.co)

**LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL** – Carrera 10 No. 12-15

Palacio de Justicia “Pedro Elías Serrano Abadía” Torre B Piso 17 Cali, Valle Del Cauca.

E-mail: [deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co](mailto:deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co)

**AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-** E-mail:

[procesosnacionales@defensajuridica.gov.co](mailto:procesosnacionales@defensajuridica.gov.co) Carrera 7 No.75-66 Piso 2 y 3 Bogotá D.C.

## MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 58 Judicial I para asuntos Administrativos de Cali-Valle

Calle 11 No. 5-54 oficina 308 Edificio Bancolombia, Santiago de Cali (Valle del Cauca)

Amablemente solicito que las notificaciones a las entidades demandadas se realicen de conformidad con lo establecido en el inciso 4° del artículo 199 del C.P.A.C.A. modificado por del artículo 612 de la Ley 1564 de 2012, que a la letra reza:

*“En este evento, las copias de la demanda y de sus anexos quedarán en la secretaría a disposición del notificado y el traslado o los términos que conceda el auto notificado, sólo comenzarán a correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación. Deberá remitirse de manera inmediata y a través del servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, sin perjuicio de las copias que deban quedar en el expediente a su disposición de conformidad con lo establecido en este inciso.” (Resaltado fuera de texto)*

Los Demandantes y el suscrito:

Carrera 14 No. 13-31 Sector Invico, (Pereira - Risaralda). Teléfonos: (6) 3159332-3175387888.

**Así mismo, solicito y autorizo de forma expresa que todas las decisiones y citaciones que adopte el Despacho, tal como lo señala el art. 205 de la Ley 1437 de 2011 me sean notificadas al correo electrónico [notificaciones@legalgroup.info](mailto:notificaciones@legalgroup.info)**

## ANEXOS

1. Poderes para actuar. (ANEXO 1)
2. Certificado de existencia y representación legal de LEGALGROUP ESPECIALISTAS EN DERECHO S.A.S. (ANEXO 2)
3. Constancia de notificación de la solicitud de conciliación a la Agencia Jurídica. (ANEXO 3)
4. Constancia de no conciliación. (ANEXO 4)
5. Copias de la demanda y de sus anexos para surtir el traslado de las partes, al Ministerio Público y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en medio magnético. (ANEXO 5)

6. Copia de la demanda y sus anexos en medio magnético CD para el archivo del Juzgado. (ANEXO 6)

SE INFORMA AL HONORABLE DESPACHO QUE LA GRAN MAYORÍA DE DOCUMENTOS EN MENCIÓN SE APORTAN EN MEDIOS MAGNÉTICOS COMO SÍMBOLO DE COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE, EVITANDO IMPRESIONES INNECESARIAS, ASÍ COMO EN CABAL ACATAMIENTO DE LA POLÍTICA DE CERO PAPEL QUE SE HA VENIDO IMPLEMENTANDO A NIVEL NACIONAL, LA QUE FUE ADOPTADA CON CARÁCTER OBLIGATORIO POR EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 04 DEL 03 DE ABRIL DE 2012 “EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA CERO PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”

Atentamente,



**JONATHAN VELÁSQUEZ SEPÚLVEDA**  
Representante Legal de LEGALGROUP  
ESPECIALISTAS EN DERECHO S.A.S.